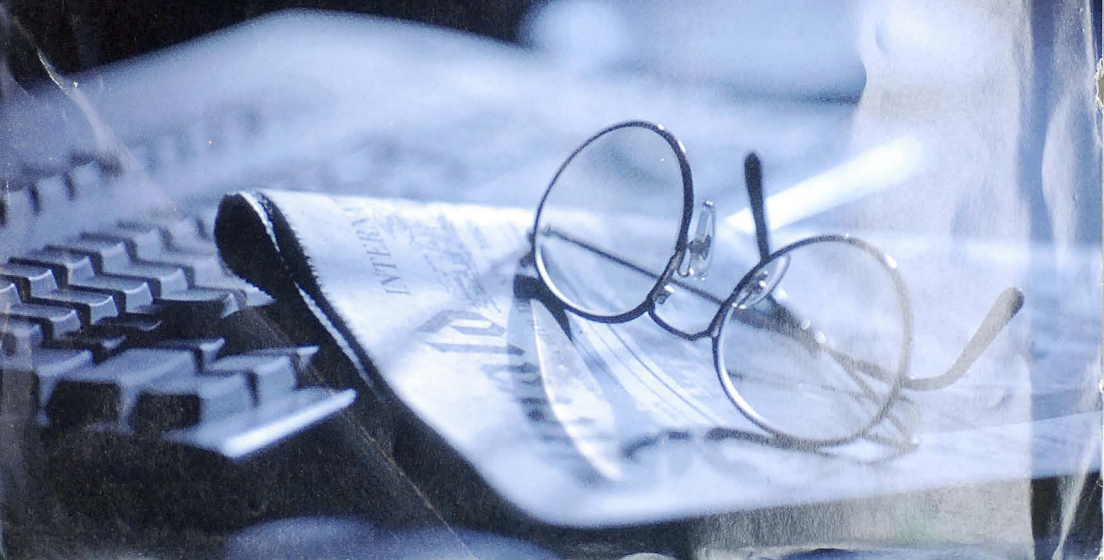




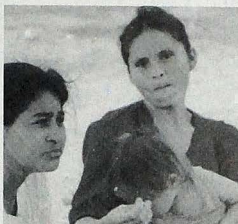
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

Calle Arce No.1020. San Salvador, El Salvador. Tel.: 271-5990 Fax: 271-4764 e.mail: infoutec@utec.com.sv

**“La perseverancia
hace posible
que el hombre
pueda alcanzar
la meta de
sus ilusiones ...”**



CONTENIDO



Editorial 4

Informe UTEC

Evolución económica 1998. Perspectivas 8

La acción colectiva y el conflicto
Socio-Político El Salvador 1998 18

Documentos

Participación ciudadana y fortalecimiento
de la Sociedad Civil 37

Resultados de la XIX encuesta de opinión pública 50

Directorio

entorno

Universidad Tecnológica
de El Salvador

Director General
Lic. José Mauricio Loucel
Presidente-Rector

Director Ejecutivo
Lic. Rafael Rodríguez Loucel
Vicerrector de Investigaciones y
Proyección Social y Estudios
de Postgrados

Director de Producción
Ing. Lorena de Rodríguez
Vicerrectora de Desarrollo Corporativo

Consejo Editorial
Rafael Rodríguez Loucel
Lorena de Rodríguez
Jorge Barraza Ibarra
Rafael Guido Béjar

Diseño y diagramación
Guillermo A. Contreras

Levantamiento de Textos
Lucey de Rochac

Corrector de Pruebas
Braulio Galdámez

Diseño de Portada
Guillermo A. Contreras

Fotografías
Eulalio Gómez

Edición
Miguel Huezco Mlxco

v

Los artículos y documentos que
aparecen en esta edición son
responsabilidad de sus autores

Se autoriza la reproducción total o
parcial de los artículos siempre
que se cite la fuente.

Deberá solicitar autorización
de los artículos reproducidos
de otras publicaciones

La Revista entorno es una publicación
de la Universidad Tecnológica
de El Salvador, Calle Arce N° 1020
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels. 271-5990 Fax 271-4764

v

e-mail: infoutec@utec.edu.sv
página web: <http://www.utec.edu.sv>

EDITORIAL

Cada 365 días, por convención social, las sociedades occidentales celebran el final y el inicio de un nuevo año. Cada 365 días, precisamente en la medianoche del 31 de diciembre de cada año, se asiste a la despedida del año que muere y al nacimiento del año que desputa. El hombre antiguo hizo conciencia del tiempo en la alborada de cada día y en el anochecer, cuando el astro-sol se pierde en el horizonte, dejando a oscuras la porción del planeta que se esconde al girar en su eje. Cada 365 días, el planeta Tierra completa una vuelta alrededor del sol y, en ese periplo, el hombre registra los acontecimientos dichosos y desafortunados que conforman la memoria del planeta, la región, el país y la comunidad. Las religiones tradicionales celebraban el inicio del nuevo año durante el equinoccio de la primavera, el punto exacto en el que la Tierra cruza el ecuador celeste, haciendo exactamente iguales el tiempo del día y la noche. Además, de acuerdo con las antiguas creencias, es la primavera el inicio de un renacimiento de la vida y la naturaleza después de los duros rigores del invierno.

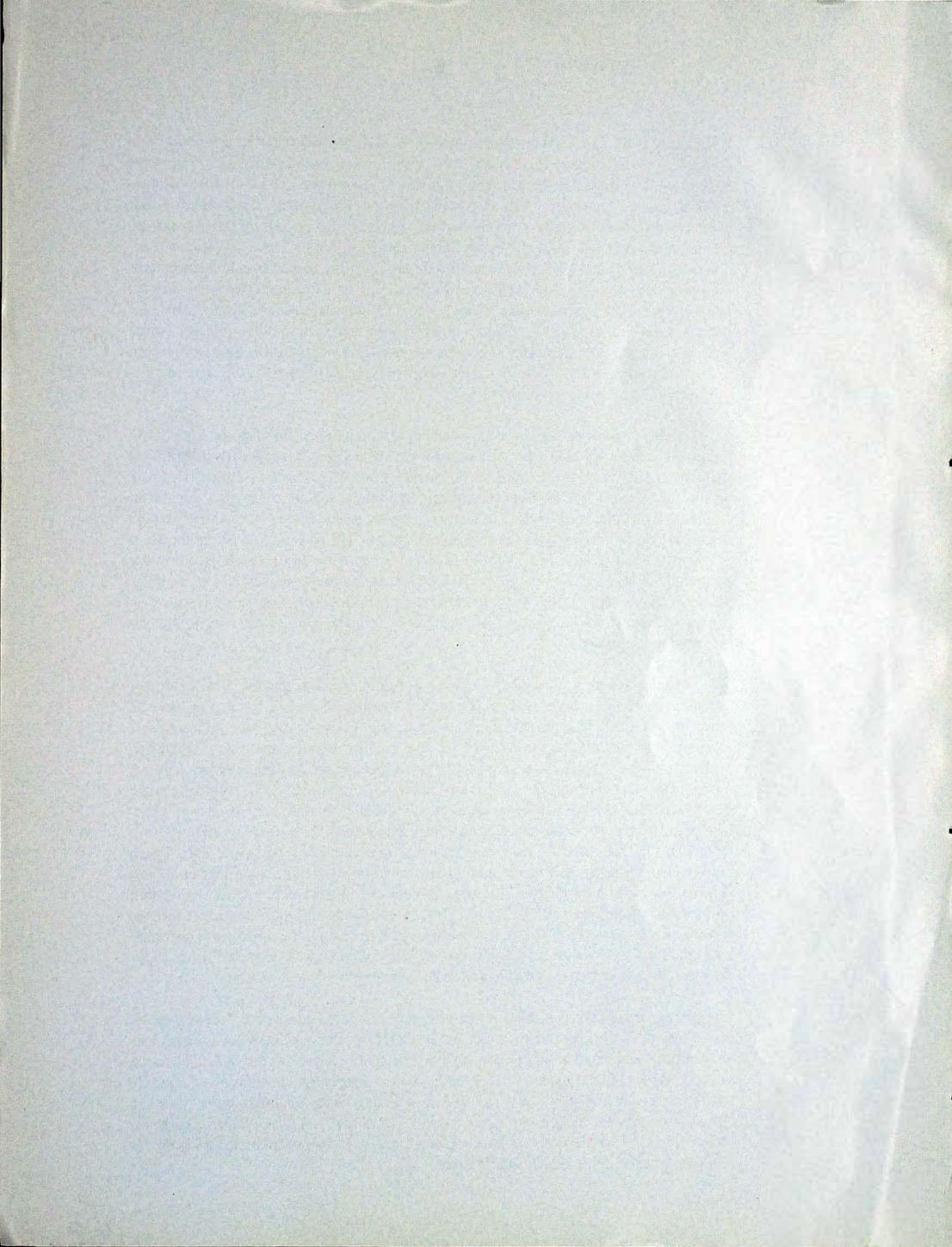
Como se ha expresado anteriormente, por convención social, los conglomerados humanos vinculados a la cultura occidental, hemos marcado el cambio periódico de cada año cada 31 de diciembre y, en esa fecha, hacemos un recuento detallado de nuestros logros y fracasos, de los eventos afortunados y de aquéllos que dejaron profundas huellas de dolor, de los éxitos y los fracasos, de los aciertos y los errores. Esta evaluación, como se quiera, trasciende al plano institucional, al país, a los entornos que nos condicionan y definen los acontecimientos diarios. Aunque el recuento de los hechos simples es necesario, en las sociedades políticas el análisis de los eventos políticos es un ritual obligado para determinar las fuerzas profundas que mueven los fenómenos sociales y las tendencias que, de no modificarse, marcan el surco de los acontecimientos futuros. Cada año, las sociedades responsables están en la obligación de hacer un autoanálisis de los acontecimientos que definen su futuro y establecer, con base en los propósitos y objetivos sociales que las animan, las grandes líneas de sus esperanzas y anhelos.

Al finalizar 1998, la sociedad salvadoreña ha cerrado otro año más de esfuerzos en la construcción de un nuevo país; este país que es para todos, pero que no siempre cuenta con la aprobación de todos sus habitantes, especialmente los sectores de más bajos ingresos. El año se ha visto ensombrecido por el incremento de la pobreza, por el desempleo de tantos salvadoreños que no consiguen un puesto de trabajo, por las crueles notas que nos impone una delincuencia desenfundada, que no alcanza a ser detenida por las autoridades responsables de la seguridad ciudadana. Los fenómenos naturales cobraron su cuota: el huracán Mitch dejó en Centroamérica y en nuestro país una secuela de destrucción, dolor y luto. Cultivos arrasados, casas destruidas, inundaciones, miles de desplazados, nos hicieron reflexionar sobre nuestra escasa cultura para prevenir desastres y la endeble estructura social en la que sobreviven nuestros campesinos. Pero también salió a flote el espíritu solidario de los salvadoreños y su vocación de servicio.

La economía siguió marcando el paso de las corrientes neoliberales, que cada año hacen sonar las trompetas del triunfalismo de sus recetas. Los responsables de las políticas económicas se vanaglorian de una estabilidad macroeconómica, botón de oro de sus aciertos, que no explican porqué los pobres siguen siendo más pobres en un país en donde la abundancia campea en las casas de los privilegiados. Los defensores de las recetas de la libertad de mercado no entienden todavía, igual que en el pasado, porqué la mano invisible de Adán Smith no llena los bolsillos y los estómagos de los indigentes, de los habitantes de las zonas marginales y las villas miseria, de las prostitutas y de los ladrones y maleantes, que le apuestan a la sobrevivencia en cada una de sus fechorías. En este año, el país sigue siendo marcadamente pobre.

Los conflictos sociales están a la espera, aguardando nuevos espacios para replantear dinámicamente las expectativas de los nuevos tiempos. Como se plantea en uno de nuestros artículos: "Hay una transición en la matriz de conflictos, cuyo contexto está caracterizado por una economía con un crecimiento insuficiente y sin definición productiva, una ciudadanía desconfiada y desafecta con la institucionalidad política, élites afanadas por reacomodar sus recursos de poder... la existencia de organizaciones civiles débiles y de sectores de la población en desintegración, mostrando propensión al estallido salvaje, como lo muestra la fuerte ola delincencial." La cita es impactante, pareciera que ya no hay nada que hacer; pero no es cierto, significa dialécticamente que la tarea que se visualiza es imponente pero factible, en la medida en que hombres y recursos se retomen por una dirección política con un gran sentido de nación y un escaso sentido de partido. Solamente así concebimos la proyección del estadista que el país necesita para construir la patria de los salvadoreños, no la de las tonadas publicitarias partidistas, sino la real, la de todos los días, a la que tenemos derecho por derecho propio.

El número de ENTORNO que entregamos en esta oportunidad tiene, además de su diagnosis, la identificación propositiva de los retos. No nos interesa granjearnos amistades o enemistades; pretendemos abonar el gran campo de trabajo de la patria salvadoreña y, como Universidad Tecnológica, nos comprometemos en el esfuerzo de participar en la formación de una nueva sociedad llena de horizontes para sus ciudadanos. En ese reto como Universidad, adquirimos el compromiso serio de formar al nuevo salvadoreño, al hombre capaz, íntegro, justo y luchador. Hoy en día la patria necesita de nuevo de sus patriotas.





INFORME UTEC 1998

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE POSTGRADO
DIRECCION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

RAFAEL RODRIGUEZ LOUCEL
JORGE BARRAZA IBARRA
RAFAEL GUIDO BEJAR



EVOLUCION ECONOMICA 1998. PERSPECTIVAS

8

El análisis de los fenómenos económicos en las sociedades modernas tiene un dinamismo particular; por una parte ofrece la posibilidad de examinar las tendencias que, en una u otra forma, responden a las direcciones que la política económica va acentuando en el diario quehacer de las actividades económicas y, por otra parte, explica también las conductas de los agentes económicos interactuando en su doble papel de productores y consumidores. Los factores políticos y sociales influyen indiscutiblemente en este proceso integral de desarrollo que, a la postre, se traduce en mayor bienestar o una más difundida pobreza. Descifrar e interpretar una fenomenología, compleja de por sí, no es nada fácil; pero, en el campo de las ciencias sociales el intento es obligado, especialmente cuando se trata de economías pobres, en donde el adecuado uso de los recursos disponibles y su equitativa distribución se convierten en la tenue frontera entre una mejor calidad de vida o la marginalidad cuasi permanente. Por demás está decir que, en este examen, la objetividad puede ser confundida por pesimismo, y la franqueza en los señalamientos puede ser vista como un abanderamiento de posiciones antigubernamentales que, a la postre, reciben los señalamientos sin la reflexividad crítica más propia del estadista que del político.

Pero lo cierto es que no se puede contribuir a la construcción de una mejor sociedad si sus instituciones, especialmente las de educación, no tienen la fortaleza ética para puntualizar los rumbos errados y las correcciones necesarias. Ello no puede significar antagonismo, significa sencillamente un enfoque diferente, un punto de vista constructivo, cuyo único propósito es el fortalecimiento de la nación como tal, para los seis millones de salvadoreños que diariamente concurren en los esfuerzos de condiciones dignas de seres humanos, para ellos y los suyos.

No puede ignorarse que la economía no es un fin en sí mismo; el adecuado manejo de las variables macro-económicas solamente tiene sentido, en la medida en que los beneficios de este hecho sean una realidad concreta en las familias salvadoreñas. Lo contrario es un lirismo sin sentido. Y en este punto hay mucho que debe ser reflexionado.

El análisis que presentamos en el presente informe pretende ser veraz, objetivo, concreto e imparcial. La Universidad es un espacio para la libertad, y ese concepto lo significa todo; no estamos a favor ni en contra de intereses pequeños o grandes. Nuestro único compromiso es con la verdad y con nuestras juventudes, que son la

patria del mañana. En la medida en que llenemos esas expectativas, estaremos ciertos de que caminamos en el sendero correcto.

LA ECONOMÍA EN 1998

a) El entorno externo

En los primeros cinco años, a partir de 1990, las tasas de crecimiento del PIB en la mayoría de países latinoamericanos experimentaron un período de auge; pero, a partir de 1996, empiezan a dar muestras de un debilitamiento provocado por la caída de los precios de muchos de los productos primarios, especialmente el petróleo y el cobre, considerados como estratégicos en la dinámica del crecimiento de los países de la región. Esta situación incide muy decididamente en la capacidad de compra, tanto interna como externa de las economías, en los saldos de las balanzas comerciales y en los niveles de reservas internacionales. Al panorama anterior se agregan los efectos adversos de conflictos internos de orden socio-político y los causados por el impacto de algunos fenómenos naturales.

En 1998, casi todos los países de la región experimentaron una reducción en los niveles de actividad económica, agravados por la crisis financiera que, en este año, inicia en el este y sudeste asiático y Rusia, que plantea algunos problemas a los mercados financieros de Estados Unidos y amenaza seriamente a mercados de mayor debilidad como pueden ser Brasil y México. Las cada vez más estrechas relaciones de interdependencia, resultado del proceso de globalización mundial, permiten una alta difusión de crisis locales, cuyo manejo trasciende las políticas económicas nacionales.

El lento crecimiento promedio del año, el debilitamiento de las exportaciones, las amenazas de la crisis financiera asiática de adquirir dimensiones

mundiales, contrastan con los promocionados éxitos de los años ochenta y principios de los noventa, en materia de estabilización y ajuste, especialmente en el cuidadoso manejo macroeconómico. En este panorama, vale la pena destacar las cada vez más frecuentes denuncias del fracaso de las llamadas recetas neoliberales como responsables del empobrecimiento inexorable de amplias capas de población, así como del hecho de que el ajuste tiene mucho que ver con el desempleo y la marginación económica. A tal grado que el Papa Juan Pablo II, en su documento "Iglesia en América", critica a la globalización económica que fortalece a los poderosos y al neoliberalismo que castiga a los más pobres. El neoliberalismo económico, que ha sido la aspiración apoyada por los gobernantes de la región en los últimos diez años, se ha convertido, a juicio del Papa, en "una justificación ideológica de algunas actitudes y modos de obrar en el campo social y político, que causan la marginación de los más débiles."

El producto interno bruto de la región centroamericana aumentó en 5.5%, nivel levemente superior a la meta fijada. Se considera que, en su consecución, hay una influencia directa de una política monetaria y fiscal relativamente flexible orientada a estimular la actividad económica. Hay esfuerzos generalizados por mantener un bajo déficit público, una baja tasa de inflación y una reducción del déficit externo.

La crisis financiera asiática no provocó problemas serios en la región, en parte por el reducido tamaño del mercado de capitales y al hecho de que gran parte de las exportaciones regionales tienen como destino mercados no afectados por la crisis. Sin embargo, la región no estuvo exenta de los efectos provocados por los diferenciales en las tasas de interés y ciertas fugas de capital.

b) El Salvador en 1998: un análisis cualitativo

Desde 1989, los esfuerzos de los responsables de la política económica nacional plantearon la urgencia de establecer un sistema de libertad de mercado y de competitividad, basados en una mayor productividad. La gran tarea del Estado consistía en implementar una libre competencia entre los diferentes actores económicos, ausentes de subsidios, y con el propósito de estimular la eficacia y la productividad. La injerencia estatal solamente puede justificarse especialmente cuando se da un predominio de intereses particulares. La interrogante es cómo se puede configurar una legítima economía social de mercado en un país, en donde la competencia está sesgada y existe una aceptación natural, valga el término, de monopolios y oligopolios. El poder ejecutivo gradualmente se ha convertido en un rehén de estos grupos de intereses, con mayor evidencia en ciertas actividades clave de la economía. Los medios de comunicación son específicos instrumentos de control y la estructura social, un obstáculo prácticamente insalvable.

El país, como el resto del mundo, afrontará en 1999, un momento difícil por causas tanto endógenas como exógenas; entre ellas se citan: un período eleccionario presidencial, una potencial crisis financiera de carácter mundial y las probabilidades de ocurrencia de nuevos fenómenos naturales. Para los optimistas, la crisis ofrece la ventaja de una oportunidad de cambio; éste podría gestarse, independientemente del partido que llegue al gobierno, siempre que exista la voluntad política para facilitararlo, con el apoyo y la concertación de los agentes productivos y de todos los ciudadanos en general para ponerlo en práctica. Sin pretender ser apocalíptico, se tiene la impresión de que otro período de cinco años, sin hacer las cosas bien o a medias, sería catastrófico para las nuevas generaciones.

La situación económica y política del país ha cambiado notablemente en los últimos años. Las políticas de estabilización, fiscales, monetarias y cambiarias, además de las reformas económicas implementadas, permitieron que El Salvador creciera a una tasa promedio anual del 5.4%. En 1998, el producto interno bruto creció alrededor de 3.5%, tasa muy similar a la de 1997. Este comportamiento está asociado al impulso de las exportaciones no tradicionales, al aumento sostenido de las remesas familiares provenientes del exterior y a las operaciones de maquila, pese a que las exportaciones de café disminuyeron sensiblemente en un 31%, como consecuencia de la caída de los precios internacionales del grano. Es de hacer notar que el inicio y el avance en materia de estabilización y algunas tibias reformas se dan en y al final de una guerra civil, que tuvo grandes costos humanos y económicos. Sin embargo, detrás de estas aparentes altas tasas de crecimiento económico, se esconden serias dudas sobre la capacidad del país para sostenerlas en los años venideros, a efecto de lograr un progreso más dinámico, una significativa reducción en los niveles de pobreza y una mejor equidad económica y social. El crecimiento que puede esperarse para 1999 es muy modesto considerando, como ya ha sido dicho anteriormente, la amenaza de una crisis financiera mundial, el período eleccionario, un receso natural en las inversiones, a lo que se agrega la prevalencia de condiciones sociales de marginalidad y pobreza no satisfactorias, difícilmente solucionables a corto plazo, mediante esfuerzos que trascienden los modelos, estilos de gobierno e ideologías.

Los esfuerzos a nivel macroeconómico no son palpables en el nivel microeconómico, aun cuando la tesis oficial sea diferente. En el sector financiero, los proyectos originales de las leyes que normarían las actividades del sector han

sido alterados por otras propuestas y la versión definitiva se dilata, sin llegar a establecer un marco legal preciso y concreto a pesar del cierre de financieras y los recientes problemas de solvencia del Banco Credisa. Esto nos obliga a reiterar la urgencia de una legislación, que regule a los grupos financieros y que posibilite una mayor cobertura de la supervisión bancaria, complementada por una Ley de quiebras y fusiones.

La institucionalidad y el proceso de integración centroamericana siguen con su inercia tradicional, a pesar de un ejercicio que sobrepasa cuatro décadas. Esto limita las opciones de crecimiento basadas en lo que debería ser un natural proceso expansivo de las economías centroamericanas. En el campo presupuestario, el gobierno anunció una meta del 50% del presupuesto de la nación en el gasto social que no se cumplió; para 1999, esa meta continúa siendo utópica dado que el actual nivel del mismo apenas llega a un 32% y que, para el año en curso, los requerimientos de un mayor gasto corriente imposibilitan la dotación de recursos financieros para otras actividades.

Por otra parte, una carga tributaria del 11%, una cultura muy cimentada de evasión fiscal y un gasto corriente elevado, no permiten fundar esperanzas de que el gobierno y los sectores productivos dispongan de mayores recursos. Se estima que el déficit fiscal alcanzará 1.6% del PIB. Obviamente esta escasez condiciona las opciones en la solución de los problemas estructurales, que aquejan al país desde hace varias décadas y que requieren de significativos recursos. Se necesitan recursos menos comerciales, más blandos, para mejorar sustancialmente la infraestructura física y humana con medios idóneos para esta categoría de inversiones. El Banco Multisectorial podría jugar un importante papel en lo que respecta a apoyar esfuerzos en el medio ambiente, la salud, la educación, convirtiéndose así en un

auténtico Banco multisectorial, más positivamente selectivo, más especializado, más en consonancia con las genuinas demandas de crédito que exigen estas actividades de maduración lenta.

En lo que respecta al mercado laboral, hay un desempleo abierto bastante importante estadísticamente registrado en un 9% y un desempleo que pareciera crecer cada día más; pero, a pesar de la inexistencia de datos oficiales, se estima que sobrepasa el 30%, con salarios muy deprimidos y una flexibilidad laboral que, si bien es cierto resulta conveniente para el caso de El Salvador, no es posible negar que probablemente trasciende lo prudente posibilitando una explotación de la mano de obra en algunas actividades, en las que se destaca la maquila con turnos hasta de doce horas diarias, carencia de prestaciones y salarios que no compensan el esfuerzo aportado. La inflación continuó en muy bajos niveles durante todo el año; sin embargo, el fuerte aumento de precios en el mes de noviembre, que alcanzó un 2.2%, contribuyó a que se registrara una tasa de 4.3% en el período de un año.

Los ingresos de capitales del exterior se vieron incrementados considerablemente en el año, lo que produjo una abundancia de liquidez que facilitó la expansión del crédito, la reducción en las tasas de interés y el mantenimiento de la estabilidad cambiaria.

En la misma forma que en el resto de países centroamericanos, se experimentó la embestida del huracán Mitch, que causó serios destrozos en los cultivos de exportación; pero es de esperar que el mayor impacto de este fenómeno natural se haga sentir hasta 1999.

La opinión de algunos analistas económicos es que 1998 fue un año de continuidad de las tendencias que se originan en 1995 y 1996. La desaceleración de la economía es una de las características principales y, en algunos sectores, un práctico estancamiento. Como ejemplo, el programa económico

en 1997 aseguró que el crecimiento de 1996 había sido del 3%; dos años después, los informes gubernamentales estimaban dicho crecimiento en solamente 1.8%. La publicación de cifras tan diferentes sobre un mismo fenómeno ha ocasionado una pérdida de credibilidad en las mismas, denominadas por algunos analistas como "falacia de las estadísticas" y, por otros más críticos, como "un injustificable manipuleo con fines políticos."

Para el analista económico, que es usuario y no productor de las mismas, las dudas se suscitan por las incongruencias entre realidad y las estimaciones que miden los fenómenos; circunstancia que obliga a una mayor perspicacia analítica, para encontrar explicaciones congruentes en un contexto integral de resultados reales, que expliquen con alguna lógica la relación causa y efecto de una realidad concreta. Como ejemplo, existen incongruencias en las cifras de los ingresos de divisas extraordinarias y eventuales, como las remesas familiares y las ventas de activos públicos, que ofrecen la idea de una ilusión superavitaria comercial externa, pese a un ensanchamiento progresivo de la brecha comercial en los últimos años.

En el campo financiero se afirma que el país tiene un sistema financiero fortalecido, prueba de ello es que los bancos salvadoreños financian un alto porcentaje del total del crédito otorgado a nivel centroamericano. Esto es posible gracias al tamaño económico adquirido por los bancos y a la red que han logrado montar en el resto de los países centroamericanos. Pero eso no significa necesariamente la existencia de un siste-

ma financiero sólido. Todo lo contrario, quedan dudas frente a los problemas de fraude financiero registrados en los últimos dos años, a lo que hay que agregar la debilidad de la supervisión financiera. En este punto deben acotarse la fragilidad de la legislación financiera, tanto como una alta dependencia política en las decisiones del ente supervisor. Ello impide que la acción de la Superintendencia sea preventiva y oportuna, capaz de anticiparse a insolvencias potenciales. Es indispensable el control de los créditos relacionados o de cualquier situación anómala que pudiera difundirse en el sistema. Sobre la percepción de que los casos graves se resuelven fuera de la Superintendencia, en otras instancias,

es urgente fortalecer las exigencias de patrimonio, limitar el crédito relacionado, la cobertura de la fiscalización, la autonomía y el presupuesto.

En 1998, se mantuvieron vigentes los objetivos básicos de mantener la estabilidad de precios y el tipo de cambio. Se pretendió mantener el equilibrio fiscal, pero el déficit se elevó a

2.3% del PIB, pese a un probable incremento en los ingresos corrientes basados en un aumento del 7.2% en la captación en el impuesto al valor agregado y también en el impuesto sobre la renta. Por su parte, la política monetaria continuó orientada a regular y reducir los excesos de liquidez en la economía, especialmente para mantener la estabilidad y evitar presiones inflacionarias. Las tasas de interés nominales activas y pasivas, en moneda nacional y extranjera, se redujeron progresivamente durante el año; pero el exceso de liquidez posibilitó la expansión del crédito, principalmente hacia los sectores de

La desaceleración de la economía es una de las características principales y, en algunos sectores, existe un estancamiento

construcción, vivienda y, en alguna medida, los servicios y el sector agropecuario. La estabilidad del tipo de cambio permaneció igual que los últimos dos años, mediante la intervención del Banco Central por la vía de las operaciones de mercado abierto.

La política arancelaria ha tenido, como objetivo, inducir el proceso de globalización mediante la instrumentación de los aranceles. Se pretendía alcanzar un piso de 5% y un techo de 10% para la importación de bienes intermedios y de un 15% para los bienes finales. Los aranceles de las materias primas y bienes de capital habían sido llevados a un arancel cero desde diciembre de 1996. Complementariamente la política comercial externa ha sido dirigida a la consecución de importantes acuerdos comerciales; sin embargo, el tratado de libre comercio con México no ha sido todo lo fluido que se suponía y solamente cuenta en el activo la firma de un tratado de libre comercio con República Dominicana, cuya vigencia es en enero de 1999.

En cuanto a los ajustes estructurales requeridos para impulsar el proceso de desarrollo económico, cuenta la reforma a la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES),

que establece la asignación anual del 6% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional a las municipalidades para apoyar el desarrollo local. Este es un avance en lo que respecta a la descentralización del poder del Estado, la autonomía municipal y el desarrollo local. También se modificó la Ley de Zonas Francas y de Comercialización, con el objetivo de proteger sectores sensibles de la economía nacional como el agropecuario; es de esperar que la ley no contribuya a proporcionar modalidades para generar prácticas de comercio desleal y contrabandos. Posiblemente la reforma más importante ha sido el inicio de operaciones de cinco administradoras de fondos de pensiones (AFP), con aportes de capital sumamente cuantiosos, cuyo origen son los aportes de los trabajadores. El manejo de este sistema, sujeto a la supervisión de una superintendencia, ha sido cuestionado por el peligro de que un mal manejo de esos fondos y una insuficiente supervisión pueden dar lugar a una seria crisis financiera, que podría arrastrar gran parte del sistema y dejar en la indigencia a los trabajadores que les están confiando sus ahorros de pensión.

LAS PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA PARA 1999

Las perspectivas económicas para 1999 se plantean en función de los retos, que deben ser afrontados especialmente por los futuros directores de la política económica, para resolver los acuciantes problemas económicos y sociales que actualmente presenta el país, orientando la economía consistentemente por la vía del desarrollo económico. En este sentido, es importante, en primer lugar, hacer conciencia de la magnitud y condiciones de los problemas, a efecto de implementar soluciones reales y consistentes. Dado que los gobiernos de ARENA, que acceden al poder desde 1989, se vincularon estrechamente con la implementación de medidas de corte neoliberal, sujetando las decisiones económicas a las leyes del mercado, la privatización de la economía y el consecuente debilitamiento del aparato estatal, la inserción del país en el fenómeno mundial de la globalización y la modernización de la economía, cabe preguntarse en qué medida, después de diez años de aplicación, el esquema económico ha sido exitoso y de beneficio para la sociedad salvadoreña. Pareciera ser que la globalización, como fórmula salvadora, ha creado más problemas que beneficios, tal como lo indican las permanentes denuncias que se le hacen en la mayoría de países menos desarrollados. En el caso de El Salvador, diez años de experiencias en diferentes ámbitos no han dado los resultados deseados: el fomento de las exportaciones no tradicionales del período Cristiani no prosperó; posteriormente, la liberación de los mercados, la eliminación de los subsidios, la reducción en los arance-

les, el incremento al impuesto al valor agregado, la teoría del rebalse y la disminución en la capacidad del Estado para intervenir en la actividad económica, no presentan resultados significativos. Todo lo contrario, el aumento en el desempleo, el incremento de la pobreza, la reducción en la capacidad adquisitiva de la población, la corrupción galopante, la delincuencia y otros males sociales, se han venido identificando constantemente por la población salvadoreña como los retos que deben ser enfrentados por el sistema económico imperante.

Pareciera ser que el crecimiento económico en 1998 no fue satisfactorio; muchos empresarios consideran que hay un proceso recesivo que se inició en 1996 y que todavía no ha sido superado. Es por eso que las expectativas de crecimiento para 1999 no son muy optimistas. Por su parte, la carga tributaria estimada en prome-

dio en un 11% del PIB, presenta una fuerte rigidez estructural, que impide reforzar el gasto social, modernizar el aparato institucional del Estado y disminuir las presiones sobre la tasa de interés. La gestión macro-económica es una mera continuación de la tendencia de años anteriores, que opera bajo el principio de "que los agentes económicos en general son buenos tomadores de oportunidades", a pesar de que continuamente demuestran una muy baja capacidad competitiva y de innovación. El decrecimiento de los activos del Estado en más de 1,000 millones de dólares, descontado el pago de 300 millones de dólares en concepto de endeudamiento externo, explica en

**Muchos
empresarios
consideran que en
la economía
salvadoreña hay
un proceso
recesivo**

gran medida el incremento en las reservas internacionales del sistema bancario; pero no se vislumbran aún los proyectos a los que serán destinados esos recursos en la promoción del desarrollo.

Un cambio en la orientación de la política económica parece necesario; está comprobado que el mercado, por sí mismo, no es capaz de crear condiciones para promover algunos sectores básicos en un proceso integral: el sector agropecuario, algunas empresas industriales, la pequeña y micro empresa requieren ser estimuladas para poner su potencialidad al servicio del desarrollo. En el proceso de globalización, las empresas industriales han expresado temores acerca de su escasa capacidad competitiva frente a empresas extranjeras; se requiere entonces un programa de modernización empresarial para hacer la producción más competitiva y de más bajos costos. La gestión macroeconómica ha sido una continuación

de las tendencias de años anteriores y continúa basada en el principio de "que los agentes económicos privados son buenos tomadores de oportunidades". Sin embargo, hasta aquí hay algunas dudas puesto que en el entorno en que se desenvuelven se tiene la impresión de no ser muy competitivos e innovadores. Pero también, a nivel estatal, no se advierten políticas sectoriales hacia el agro, las micro y pequeñas empresas, lo que es congruente con la posición del gobierno actual en contra de la planificación y las políticas sectoriales.

La carga tributaria, de solamente 11.1% del PIB, sigue manifestándose como un factor de rigidez estructural

que permita buscar variantes en la gestión macroeconómica, reforzar el gasto social, modernizar el aparato institucional del Estado y disminuir presiones sobre la tasa de interés. En este punto es bien importante señalar la necesidad de modificar las conductas, bastante generalizadas, de evasión fiscal, y la resistencia de muchos sectores privados de atender sus responsabilidades tributarias.

La venta de activos del Estado produjo durante el año la cifra de 1,000 millones de dólares, suma a la que habría que descontar 300 millones de dólares para el pago de la deuda externa. Esta situación explica el incre-

mento en las reservas internacionales del sistema bancario, pero lamentablemente no se tiene a la fecha un programa de inversiones que justifique una buena inversión de estos recursos. Es necesario mencionar el peligro de convertir en consumo recursos que, mal o bien, fueron producto de un proceso de capita-

lización de empresas estatales —que a juicio de los vientos de la modernización no deben estar en manos del Estado— y solamente deberían de servir para inversiones en el desarrollo económico del país.

Es verdaderamente importante considerar un apoyo efectivo al sector agropecuario y la promulgación de medidas sectoriales a partir de 1999; ello debiera significar la ejecución de grandes proyectos piloto o polos de desarrollo, como pudiera ser el desarrollo de los ríos Lempa, Paz, algunos polos turísticos y el Golfo de Fonseca. Estos proyectos deben combinarse con el fortalecimiento de pequeñas empresas vinculadas con las actividades de cada área.

Es importante considerar un apoyo efectivo al sector agropecuario y la promulgación de medidas sectoriales

En el campo financiero, las crisis provocadas por fraude y mala administración de empresas tales como FOMIEXPORT, INSEPRO-FINSEPRO, y el Banco Credisa, dejan mucho que desear en lo que compete a la responsabilidad del sistema financiero en la administración y manejo de recursos ajenos. Aquí hay varios puntos que señalar: en primer lugar, la privatización de la banca a partir de 1989 y las decisiones gubernamentales de proporcionar a los banqueros de actuar con toda la libertad del mercado, ha creado un grupo de poderosos banqueros cuya influencia en el marco de las actividades económicas y en el de las decisiones políticas es sumamente influyente. En segundo lugar, el mantenimiento de una institución supervisora débil, sujeta a influencias políticas hace nugatoria toda posibilidad de acción en este campo. El proyecto de Ley de Bancos, en estudio en la Asamblea Legislativa, se ha retrasado más de lo debido, a pesar de su urgente necesidad. Los aspectos de capitalización, seguros de depósitos y regulaciones sobre las operaciones bancarias, especialmente para grupos empresariales o conglomerados financieros se encuentran ausentes.

En este año, también, se efectuó la reforma al sistema de pensiones tradicionalmente manejado por el INPEP y el ISSS, hacia un nuevo sistema privado de asociaciones de pensiones, supervisado por una superintendencia, cuya capacidad de control y sanidad financiera debe ser altamente eficiente. La importante cantidad de recursos que será manejada por el sistema requiere de un riguroso control y seguimiento para evitar una catástrofe que sería de impredecibles dimensiones, además de que son ahorros de pensiones de los trabajadores. Actualmente, la imposibilidad real de cambiar de AFP (asociación de fondos de pensiones), después de más

de seis meses de operación del sistema, y la carencia de la mecánica y resultados de la rentabilidad de cada AFP y su impacto a nivel individual, es motivo de preocupación.

La inversión extranjera directa en el país fue sumamente baja; la inversión doméstica tampoco es relevante; las causas de esta situación son varias, desde la tan pregonada inseguridad jurídica, la violencia institucionalizada, la corrupción, pero básicamente la baja rentabilidad esperada de dichas inversiones. Las empresas maquileras, en su mayoría de ropa, consideradas como "industrias golondrinas" por su alta capacidad de desplazamiento de un día para otro, fueron muy importantes en un inicio contribuyendo a crear empleo; pero actualmente se nota un proceso de estancamiento a pesar de la abundancia de mano de obra barata.

El Balance de Pagos para 1999 continuará observando un fuerte déficit comercial y de servicios factoriales y la Balanza en Cuenta Corriente seguirá siendo cubierta por los más de 1,300 millones de dólares de remesas familiares con que nos obsequian los trabajadores salvadoreños en los Estados Unidos, principalmente. El problema grave es que las importaciones, especialmente de bienes de consumo suntuarios y no necesarios, sigan creciendo aceleradamente, resultado de nuestra dependencia como sociedad de consumo, y que las remesas familiares ya no sean suficientes para cubrir la brecha. Es de lamentar que por estas tendencias, que indiscutiblemente han beneficiado a un pequeño sector de importadores y comerciantes, recursos valiosos que hubieran podido servir para el desarrollo económico, se hayan dilapidado tan tristemente.

Sin lugar a dudas el gobierno actual, a escasos días de su recambio institucional, estará tentado a diferir medidas de ajuste estructural y de reacomodo

institucional e instrumental; también el nuevo gobierno podría estar tentado a la misma práctica hasta después de las elecciones de año 2000. Existe un evidente peligro de que actitudes de esta naturaleza acumulen presiones y rigideces importantes obviando la urgencia del tiempo. Consideramos que el mayor desafío futuro serán los mecanismos para estimular el ahorro y la inversión genuinos, a fin de generar proyectos que se traduzcan en incrementos de empleo productivos y permanentes y la compensación en el medio rural de obras públicas selectivas y de impacto. La protección del medio ambiente y el rescate de nuestros recursos ecológicos, con una visión de futuro, parece un tanto impredecible frente a los intereses económicos de ciertos grupos.

En resumen, 1999 no se percibe como el momento en donde surgirán suficientes agentes económicos tomadores de oportunidades, mayor capaci-

dad exportadora de productos no tradicionales, mística de innovación de productos y procesos, mayor flexibilidad en la asignación de recursos y captación de una significativa inversión extranjera directa. La viabilidad de El Salvador como nación parece estar muy lejos, pues no se aprecia más allá de expresiones, voluntades y optimismos aislados, la fuerza que impulse un desarrollo sostenible y sustentable. La voluntad política de contribuir al desarrollo sin sesgos políticos o de influencias, la concertación de todos los agentes económicos y políticos por reactivar el país, condiciones externas medianamente favorables y un giro palpable por contener los intereses particulares y darle prioridad a los intereses colectivos, es la única vía vislumbrable. La reducción de la pobreza y de la marginalidad social existente es imperiosa y necesaria para lograr esa viabilidad.



LA ACCION COLECTIVA Y EL CONFLICTO SOCIO-POLITICO EN EL SALVADOR 1998

18

El año 1998 transcurrió en forma acelerada dejando una sensación de brevedad y de incertidumbres ante el porvenir inmediato. El rasgo común con los años posteriores a los Acuerdos de Paz ha sido el evidente desplazamiento de la escena frontal social y política de los conflictos que generaron la guerra y los mismos Acuerdos de Paz.

En efecto, hay una transición en la matriz de conflictos cuyo contexto está caracterizado por una economía con crecimiento insuficiente y sin definición productiva, una ciudadanía desconfiada y desafecta con la institucionalidad política, élites afanadas en recomodar sus recursos de poder y en establecer un orden legal y moral cada vez más drásticos, revisando el marco legal propuesto bajo el entusiasmo de los Acuerdos de Paz y la idea de construir una nueva sociedad; la existencia de organizaciones civiles débiles y de sectores de la población en desintegración mostrando propensión al estallido salvaje, como lo muestra la fuerte onda delincinencial.

En los años de posguerra, los antiguos conflictos han perdido aliento frente a los nuevos que dinamizan oposiciones, disputas y enfrentamientos de actores también en proceso de transformación. El anterior conflicto entre la sociedad y la Fuerza Armada; la total dependencia del orden judicial de los cuerpos de seguridad y del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas o las corporaciones empresariales; la inaccesibilidad a la propiedad de la tierra; la exclusión política, la falta de expresión y comunicación social, etc., han perdido centralidad aunque no dejan de manifestar su presencia.

En 1998 adquirieron relevancia la acción colectiva y los conflictos que giraron en torno al Estado; fueron muy pocos los que sucedieron en la escena propiamente privada. Los expatrulleros, los transportistas, los empresarios, en el caso de las zonas francas, se movilizaron frente al Estado. Las actividades estatales en torno a la aprobación de leyes y los conflictos entre la Asamblea Legislativa y los otros dos órganos del Estado, así como también con varias instituciones del Ejecutivo, llenaron gran parte de los meses del 98.

La acción colectiva de participación ciudadana, en torno a la consulta del Plan de Nación, tuvo una especial relevancia por la intensidad que alcanzó al involucrar importantes sectores de la población local y nacional y la cobertura de todo el territorio nacional, además de la calidad de los aportes que hicieron en diagnósticos de sus localidades y propuestas de gobierno, que estructuraron para

Lo nuevo en los conflictos

Los problemas crónicos de injusticia social del país persisten, aunque adquieren nuevas dimensiones y se resitúan en la vida nacional en tanto la sociedad en su totalidad se enfrenta a nuevos retos y los actores se transforman modificando sus objetivos, intereses, estrategias y soluciones.

El conflicto social presenta nuevas características inexistentes en las décadas anteriores. Los grupos sociales dirigentes, por ejemplo, muestran públicamente importantes rivalidades, desintegraciones, distanciamientos y hasta competencia por el control del Estado —escenario inimaginable en las décadas anteriores— aunque mantienen mecanismos de cohesión mínima para no perder el predominio social y político.

Es el caso de la pugna entre el bloque gobernante, organizado desde ARENA y ciertos grupos agrarios que se fusionaron y emprendieron una recolocación en otros partidos políticos (PCN, PDC y LIDER). El nuevo tipo de conflicto produce efectos corrosivos y hasta destructivos; pero, al contrario de los conflictos anteriores, produce movimientos integradores que permiten ver procesos de recomposición de la sociedad. Aunque no todos los conflictos tienen el residuo útil para la integración que revierta la dinámica disociativa, como el conflicto que se manifiesta en los fenómenos de la delincuencia y la corrupción.

O como el efecto catastrófico de la dinámica desintegradora que ha provocado la prolongada agonía del PDC. Las numerosas disidencias de este partido han nutrido a la mayoría de partidos e igual fortalecen al sistema político general. La división del FMLN muestra quiebres en su estructura interna, sin que sus disidentes opten por otros partidos políticos. No obstan-

te, estas divisiones que antes hubiesen producido nuevos grupos armados y paramilitares, ahora producen abstencionismo o marginación, por un lado, pero también fortalecen el sistema político en general.

Las observaciones y reflexiones sobre los acontecimientos del 98 hechas en este trabajo, se basan en esta hipótesis general. La sociedad salvadoreña, al pasar por esta variedad de conflictos nuevos y mediante las experiencias que adquiere al solucionarlos o superarlos, genera una dinámica integradora, silenciosa y oculta, quizás, hasta para sus mismos actores, en una construcción difícil de un nuevo orden social.

Las fuentes de conflictividad social en la transición hacia el nuevo orden

El núcleo de la nueva conflictividad social surge de las políticas de ajuste macroeconómico y de la modernización que, para muchos, en muy poco tiempo han beneficiado a determinados grupos de interés y aumentado el rezago de otros. También surgen en los intentos de cambiar los métodos de control social y las normas legales, que condicionan el comportamiento de los ciudadanos.

Las fuentes del nuevo tipo de conflicto social pueden ubicarse en áreas muy determinadas, en las que se han concentrado las energías de los grupos dirigentes para realizar políticas especiales que hacen avanzar sus proyectos respectivos. (Ver Tabla No.2).

Es obvio que los conflictos sociales salvadoreños no se agotan en los tres entornos propuestos, No obstante, estos fueron los más dinámicos y los que mostraron mayor capacidad de integración social en el transcurso del 98.

No.	TIPO DE CONFLICTO	TEMATICA DEL CONFLICTO
1	Conflictos derivados del DESARROLLO SOCIAL.	Las confrontaciones y pugnas de las élites socio-políticas más importantes, que pugnan entre sí por conducir los procesos productivos y distributivos de los recursos materiales y de poder (los conflictos del desarrollo).
2	Conflictos derivados de la MODERNIZACIÓN del Estado.	La modernización del Estado y la economía (en especial la privatización o el cambio de la propiedad estatal y las modificaciones del anterior Estado desarrollista) para "sembrar" el mercado.
3	Conflictos derivados de las acciones de CONTROL SOCIAL.	El establecimiento de un tipo de orden social liberal y su respectivo tipo de control social y moral, aun cuando las prácticas monopolistas y proteccionistas de ciertos grupos que lo impulsan distan mucho, en la actualidad, de las pautas estrictamente liberales.

LA ACCIÓN COLECTIVA Y LOS NUEVOS CONFLICTOS SOCIALES

I. Los conflictos derivados del nuevo desarrollo social

En el centro generador de este nuevo orden social se encuentra la idea fuerza compartida por todos los grupos —de derecha y de izquierda (unos con mayor o menor intensidad que otros)— que, ahora o en el futuro, será el mercado el que proporcione la lógica social. Es en este marco, en términos generales, donde los líderes (en la economía, la política, la religión, la cultura), delimitan espacios, impulsan y orientan sus acciones. Derechas e izquierdas se disciplinan en este marco ideológico y legal mostrando, cada vez con mayor nitidez, programas de pensamiento y acción coherentes e integradores hacia este orden nuevo.

Dentro de esta nueva visión general se perfilan, a su vez, dos formas pragmáticas de buscar el rumbo socio-económico y político, que persiguen disciplinar a la ciudadanía dentro de esta nueva forma de ver el desarrollo social y formar la razón pública, bajo la cual se normalicen los comportamientos aceptables en la sociedad. Una de estas formas tiende a instalar, casi de manera instantánea, la racionalidad del mercado, motivada fuertemente por la estrategia de las recompensas del mismo y por una aparente libertad de iniciativas para lograrlas. Como por obra de magia, la racionalidad de los

actores obedecería a los dictados de la libertad del mercado en contra de los "mercantilistas", que seguirían manipulando el Estado para sus propios beneficios. Un reducido grupo de sectores de derecha, que se ha identificado como los Amigos de la Libertad, y muchos empresarios descontentos desorganizados podrían situarse en este espacio.

La otra forma pragmática mantiene en la práctica que la centralidad del mercado debe ser una realidad en el futuro, pero que en la actualidad se requiere la acción protectora del Estado, hasta que las unidades productivas nacionales puedan alcanzar condiciones para la competitividad internacional.

1. Conflictos que han llevado a una alianza conductora del desarrollo social

De esta manera, las élites más competitivas y dinámicas más fuertes del país, han llegado a constituirse en fuerza política fáctica y han impactado de manera directa en el Estado. Durante 1998, mostraron las definiciones y redefiniciones de sus elementos de dirección, sus repertorios de movilización y lucha, sus objetivos y metas. Sobre todo, han logrado el control de importantes sectores del partido de gobierno y de Estado, a los cuales adicionan sus recursos en el mercado y su poder corporativo y de conducción sectorial, para impulsar y potenciar la

contienda por la hegemonía frente al resto de élites económicas y políticas y frente a la nación.

En 1998, se perfilaron mejor las dos élites socio-políticas (que en la actualidad están transformándose en grupos liberales) que dominan la escena estatal y que intentan determinar el patrón de desarrollo del país. Una basada más fuertemente en el agro, en las actividades cafetaleras, cerealeras y ganaderas –naturalmente con ramificaciones en sectores bancarios y exportadores. Otra, descansando más en el sector financiero y comercial, con ramificaciones en la industria, más relacionada con las transnacionales, aunque también con fuertes nexos con el agro, al cual están modificando empresarialmente.

En 1998, estuvieron enfrascadas en fuertes pugnas y luchas intestinas, pero con menos enfrentamientos que en 1996 y 1997, años en los que entre estos grupos mediaron una serie de hechos encubiertos, como amenazas, asaltos y bombas a casas particulares y empresas, secuestros, movilizaciones de grupos y sectores descontentos en el interior del país, etc. En el 96, cuando

el BM y el FMI convocaron en Washington a inversionistas potenciales para El Salvador, ambos grupos hicieron causa común y avanzaron como una alianza confiable ante los inversionistas internacionales. En el 97 estuvieron divididos y los más débiles fueron expulsados del Estado y en el 98, éstos últimos sólo polemizan en los medios de comunicación, sin contar con organizaciones sociales y políticas fuertes que les mejoren sus posiciones de poder.

Las diferencias en la incidencia social y política de estas élites son enormes, en especial en cuanto a la competencia por los recursos materiales y de poder, en la cual los financistas han llevado la delantera. Los agrario/liberales centran sus diferencias en las luchas en contra de los monopolios, que impiden la liberalización real de los mercados y, por tanto, de la competencia. Tratan de eliminar sus desventajas destruyendo los monopolios estatales, el monopolio bancario y el monopolio privado de grandes empresas, como más importante la de la transportación aérea centroamericana.

El otro grupo liberal, los "liberalmo-

No.	Conflicto derivados del desarrollo social:	Acciones Colectivas
1	Movilizaciones sociales	1. Conflictos sociedad civil – institucionales: <ul style="list-style-type: none"> • Huelgas en el sector salud. • Movilización ecológica (Calle Maquillishuat). • Problema de los transportistas. • Protesta de vendedores ambulantes. • Protestas de patrulleros. 1. Conflicto empresariado/Estado: <ul style="list-style-type: none"> • Violencia (delincuencia). • Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y el sector Privado.
2	Conflictos al interior de los Organos del Estado	<ul style="list-style-type: none"> • Salida de funcionarios del gabinete. • Seguridad vrs. Justicia. • Asamblea Legislativa vrs. Justicia. • Discusión sobre el Presupuesto (1998 y 1999). • 6% de las Alcaldías. • Asamblea vrs. Ministerio de Educación.
3	Violencia social	<ul style="list-style-type: none"> • Niveles altos de delincuencia. • Problema de las cárceles y presidios. • Propuestas de erradicación de la delincuencia: pena de muerte, penas contra secuestro, otros.
4	Problemas de los Acuerdos de Paz	<ul style="list-style-type: none"> • Protesta de expatrulleros. • Otros (Problemas en tomo al programa de tierras).

nopolistas", como lo nombra la élite desplazada, controla el área económica y financiera del Estado y del mercado, así como otras instancias públicas. El peso en la industria, el comercio y los servicios transnacionalizados es visible. Su importancia internacional ha sido mostrada en los años anteriores como en la actualidad al ser referentes claves para los inversionistas transnacionales. Ninguno de los dos grupos, hasta el momento, muestran preocupación por preservar e impulsar una industria nacional, que no sea la maquila.

2. El sistema financiero como instrumento de poder en 1998

El sistema financiero es sumamente complejo y se ha visto fortalecido en los últimos años, después de un proceso de privatización bancaria que devolvió, a manos privadas y al sistema de mercado, las actividades financieras. Los diferentes grupos económicos fuertes se acusan entre sí por la concentración del poder financiero en pocas manos por obra y gracia de los prestanombres. La legislación emitida desde el periodo Cristiani se esforzó por otorgar al sistema financiero privado todas las libertades posibles, confiando a una raquítica Superintendencia el control de un monstruo de mil cabezas.

Los diferentes casos de fraudes financieros cometidos por algunas instituciones son el fiel reflejo de una realidad que, como espada de Damocles, se encuentra ahí, en el centro de un sistema lo suficientemente exento de controles. El caso INSEPRO-FINSEPRO, la reciente quiebra del Banco Credisa (1999) y los rumores, no tan infundados, de que hay otras instituciones financieras en crisis son muestras evidentes de una realidad preocupante.

La expansión del sistema financiero, especialmente de algunas instituciones grandes, es un hecho evidente. También es igualmente cierto su peso político y su influencia en la economía. Una crisis

en el sistema sería fatal, pero igualmente preocupa que esta posibilidad se encuentra en las escasas manos de banqueros poderosos casi sin control.

Los intereses de la banca no responden a las necesidades actuales de capital de diversos sectores sociales, tampoco están en línea con los requerimientos de desarrollo nacional. Su capital tiene opciones especulativas de corto plazo, pero no podría acompañar a políticas de desarrollo de más largo aliento. Por ello la microempresa, los pequeños y medianos agricultores, el comercio informal, los artesanos, no encuentran apoyo en un sistema de esta naturaleza. Inexplicablemente, instituciones que fueron creadas con claros objetivos de desarrollo social, FIGAPE, el Fondo Social para la Vivienda, FEDECREDITO, etc., han emulado a las empresas financieras privadas cargando altos intereses a los créditos de los usuarios, aun cuando los fondos que manejan tienen costos menores que los depósitos del público en los bancos, pues son aportaciones de trabajadores y aportes patronales.

La aprobación del sistema de pensiones en manos de empresas privadas significa una corriente de recursos financieros de gran magnitud. Se sustituyó el viejo concepto de solidaridad por un nuevo concepto individualista de formación de un ahorro personal. Es el signo institucionalizado de una nueva filosofía de seguridad personal y del avance de la desregulación laboral en país. Lamentablemente es, no obstante la existencia de otra Superintendencia, otro sistema sin control que puede dejar en la indigencia a miles de miles de salvadoreños pobres que ponen en este sistema todo su futuro.

En el momento presente, donde solamente hay recursos que se perciben sin obligaciones, no hay problemas aparentes. Mañana, cuando tenga que atenderse pensiones, invalideces y las

obligaciones por las defunciones de los participantes, el sistema tendría que demostrar su fortaleza, que será una resultante del eficiente manejo de los recursos financieros que se le confiaron y la capacidad de los administradores de hacer inversiones cubiertas de riesgos. De lo contrario, los casos recientes de Insepro o Credisa serán pálidos reflejos de las crisis que podrían sucederse.

3. Los desarrollistas vs. los liberales

Frente a estos dos sectores liberales se encuentran los grupos desarrollistas, que ven de muy buen grado las relaciones proteccionistas de hace unas décadas con las cuales tuvieron un crecimiento importante durante el período de sustitución de importaciones y que, tras un largo y arduo proceso de treinta años, habían logrado una moderada diferenciación de los sectores rurales. De nuevo, los sectores liberales les han ganado ventaja a los desarrollistas, que tienen muchos problemas para iniciar la reconversión industrial y han logrado aliarse con la empresa transnacional.

Estos grupos empresariales, al igual que la mediana y la pequeña empresa, requieren de un Estado proteccionista por un tiempo más prolongado, mientras logran la reconversión industrial. Necesitan de verdaderas políticas industriales y líneas de incentivos. La mayor parte de élites políticas opositoras se sitúan en esta tendencia desarrollista al ubicar sus propuestas y soluciones muy cercanas a las concepciones estadísticas del desarrollo. La izquierda, con su modalidad propia, sostiene también que el Estado debe de mantener un papel importante en la redistribución de recursos para grupos, que se han visto rezagados en el pasado y sus propuestas aún no van más allá del momento desarrollista.

3.1. La crisis de la propuesta económica.

Los dos gobiernos anteriores del partido ARENA han vinculado sus decisiones, en el campo económico, a un sistema de libertad de mercado y a principios de corte neoliberales. La estrategia económica fundamental consistía en fortalecer a los sectores empresariales para dinamizar las actividades económicas, fortalecer los mecanismos de mercado como incentivo y propiciar el fomento de exportaciones no tradicionales. Al mismo tiempo, la supresión de todo tipo de subsidios estatales y esfuerzos para insertar al país en los procesos de globalización y modernización completaban el esquema. El mercado debía cumplir su papel en las decisiones fundamentales de la economía y el Estado, consecuentemente, debía minimizar su participación en la misma, dejando a los sectores privados participar sin ninguna interferencia estatal. También, se ha insistido en la presente estrategia sobre la urgencia de la modernización estatal, pero parece que se ha establecido una equivalencia entre modernización con un total debilitamiento del papel del Estado.

Dos aspectos parecen contradecir el éxito de las medidas aplicadas: 1) el incremento en el desempleo, resultado de los procesos de privatización y la recesión experimentada desde hace varios años; 2) el incremento en la pobreza, resultante del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo. FUSADES plantea que la pobreza ha disminuido frente a una realidad evidente, que se palpa en la realidad de las zonas marginales y los sectores de bajos ingresos de la sociedad. La simple elaboración de cifras estadísticas no modifica las evidencias de la realidad.

No solamente a nivel nacional sino que internacionalmente, los sectores pobres de América Latina, en donde el

esquema llamado neoliberalista está siendo aplicado, están denunciando cada vez más un sistema económico que, en vez de dar respuesta a las necesidades de la población, ha contribuido a hacer más pobres a los pobres y a colocar en la calle a un creciente número de personas que no tienen acceso a un empleo. El país no ha sido ajeno a este fenómeno y, si se pretende hablar de desarrollo económico en los años futuros, éstos son los dos primeros puntos de la agenda.

3.2. Las presiones y orientaciones de los empresarios: FUSADES

FUSADES es un grupo de presión del sector empresarial, que ha orientado los programas económicos de gobierno de los dos períodos anteriores del partido ARENA. Inicialmente tuvo mucho respaldo económico de la AID y, por lo tanto, recursos suficientes para montar importantes equipos de trabajo; sin embargo, las recomendaciones económicas ofrecidas en varias oportunidades a los gobiernos de turno no han sido exitosas, y aun los mismos empresarios no han tenido un consenso sobre los frutos de los programas implementados.

El papel de grupo de presión ha sido muy efectivo, ya que son interlocutores obligados tanto del gobierno como del partido oficial y otros partidos políticos. Han tenido capacidad para contratar frecuentemente asesores extranjeros, quienes son los autores de sus planteamientos y posiciones. No cabe duda que la empresa privada es un sector importante en cualquier país, y su colaboración es imprescindible sobre todo en el área económica; pero habría que preguntarse si un proceso de desarrollo económico integral no requerirá de la participación de otros sectores. Pareciera ser que el gobierno y el mismo partido ARENA, han

reconocido la urgencia de hacer participar a otros sectores, lo que en alguna forma explica las reorientaciones de algunas posiciones y una mayor preocupación por atender necesidades sociales, que no se reconocieron en muchos años de gobierno de ARENA.

En el 98, FUSADES se prepara para el nuevo gobierno con una propuesta nuevamente formulada por técnicos extranjeros, en la que hacen recomendaciones para la orientación económica. Después de haber visto el fracaso de las políticas de fomento de exportaciones no tradicionales, del rebalse, de la globalización, del libre juego de las fuerzas del mercado, etc., es de esperar que ahora planteen una propuesta viable y válida para la promoción del desarrollo.

4. Movilizaciones sociales de las élites

En el 98, tuvimos la oportunidad de presenciar, de nuevo, demostraciones de la capacidad de movilización social de ciertos sectores de la élite institucional. En el 96, las élites realizaron el paro de comerciantes en Usulután y la rebelión contra el acoso fiscal en los departamentos de Oriente. La demostración del Colegio de Médicos fue una evidencia de la disputa entre sectores profesionales muy fuertemente orientados hacia el Estado frente a los grupos de dirección institucional del sector Salud y, en cierto sentido, de disputa por la orientación estatal (la crítica sobre la capacidad de formular planes y programas nacionales fue un factor clave de aglutinación del movimiento tanto como las reivindicaciones grupales. Fue un movimiento que logró aglutinar a diversos sectores de médicos más allá de cuestiones ideológicas, políticas y sociales. El Ejecutivo reaccionó enérgico, inicialmente, en contra de esta demostración de fuerza social; pero luego, muestra una actitud

de concertación y negociación que lleva a aceptar las visiones de los huelguistas.

II. Conflictos de modernización del Estado

El 98 ha sido importante para avanzar en la definición de los ejes principales de acumulación y del desarrollo social del país, sobre todo en la definición de las líneas de poder que los impulsen. En los 90, las propuestas han sido variadas y numerosas, sin que alguna llegue a predominar. En una primera fase, junto a los programas de ajuste estructural, se trazaron líneas para impulsar el modelo de promoción de las exportaciones con base en los productos no tradicionales. Luego surgieron otras como las zonas francas, el turismo, el comercio y los servicios (en especial los financieros), el relanzamiento de la industria regional y, cada vez con mayor fuerza, el reforzamiento del agro. Ninguna por sí sola ha mostrado la energía suficiente para "movilizar" al país.

Cada una de estas proposiciones ha sido o es apoyada por diferentes grupos empresariales, algunos de los cuales han establecido líneas claras de disputa y conflicto. Entre ellos se han dado distintos tipos de acercamiento y han buscado entendimientos favorables con el gobierno en la búsqueda de compromisos y, sobre todo, de recursos políticos para disponer de los medios financieros, técnicos, de infraestructura, organizacionales, etc., para su respectiva propuesta. Esto ha significado variadas aproximaciones entre las élites empresariales, por un lado pugnas y alejamientos, disputas y rivalidades; por otro, afinidades, negociaciones y pactos que dejan ver, paulatinamente, las orientaciones del nuevo modelo de desarrollo.

El Estado ha desarrollado medidas de modernización en tres sentidos muy claros: a) la reducción del Estado, en

especial la disminución del personal administrativo, con muy poco éxito. Programas de retiro voluntario o de terminación de contratos fueron anulados por la contratación de personal en otras áreas; b) la privatización del Estado, con programas que ya han sido ejecutados y c) la desregulación laboral, por medio de formas especiales de aplicación de la normatividad del trabajo, en un entorno de debilidad extrema del movimiento obrero.

1. Las privatizaciones estatales

En el mes de enero del 98, se vendió el 75% de las cuatro distribuidoras de electricidad a los consorcios participantes por un monto de \$586.1 millones de dólares. La segunda privatización fue la telefónica inalámbrica INTEL adquirida por Telefónica de España en \$41.0 millones de dólares. CTE-ANTEL se vendió en el mes de julio a France-Telecom en \$275.0 millones de dólares. Estas privatizaciones están comprendidas en el concepto de modernización del Estado, que se viene manejando desde el inicio del presente gobierno. Se considera que hay un vínculo estrecho entre tres objetivos gubernamentales: la modernización, la globalización y la reducción en el peso del Estado. La tesis es que la empresa privada es mejor administradora que el Estado y que la globalización ofrece ilimitadas posibilidades para el país.

Los esfuerzos que internamente se requieren para hacer posibles estas intenciones no cuentan aún con la dinámica interna requerida, especialmente por los sectores privados, en los que se pretende apoyar el desarrollo futuro de nuestra sociedad. Para muestra basta señalar el temor de los empresarios para competir con México en un tratado de libre comercio, seguros como están de no contar con la competitividad mínima, incluso para cubrir su propio mercado. Como se

comprende ahora, el desarrollo social es condición sine qua non para entrar a la globalización con algunas opciones válidas, pero este esfuerzo no corresponde a las empresas, así como tampoco puede ser llevado a cabo por un Estado limitado y debilitado.

La venta de los activos del Estado, formados y fortalecidos durante el período de sustitución de importaciones, deja en la tesorería estatal una suma de \$902.1 millones de dólares, cuyo ingreso es por una vez. En la otra cara de la moneda, el Estado dejará de percibir los ingresos corrientes de los activos vendidos, pues pasan a ser de propiedad privada, especialmente de consorcios extranjeros que, de una u otra forma, esperan convertir en divisas transferibles a sus casas matrices, los dividendos de su inversión. Aquí hay dos puntos importantes: la forma en que el Estado invierte eficientemente los recursos recibidos, y cómo se repondrán las divisas que saldrán del país como remesas en concepto de utilidades.

Sin duda alguna, es necesario entrar a la era de las computadoras, los celulares e Internet, pero el acceso a ese club tiene un precio que debe pagarse. La interrogante permanece: los servicios de la moderna tecnología son caros y se pagan; la pregunta es la misma: ¿de dónde se obtendrán las divisas para pagarlos?

Lo más impresionante de estos movimientos políticos son las pautas de acción del partido de gobierno para alcanzar las decisiones parlamentarias: formación de mayorías legislativas volátiles para aislar e imponerse a los opositores, para lo cual fragmentó partidos, creó el mercado político de diputados independientes, expulsó diputados de las comisiones para, mediante la resta participativa, alcanzar la mitad más uno; realizó procesos legislativos sumarios en contra de funcionarios inconvenientes, etc. La

estela decisional muestra que han quedado por fuera los consensos más orgánicos y las concertaciones participativas.

2. Los enfrentamientos entre los Organos Legislativo y Ejecutivo

Desde principios del 98, las confrontaciones entre los Organos Legislativo y Ejecutivo estuvieron presentes en la escena política como indicadores importantes de la lucha por el poder. ARENA perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa y depende significativamente del apoyo de otras fracciones pequeñas afines ideológicamente. Esto es más evidente cuando se trata de votaciones que requieren de mayoría calificada, y obligan al partido oficial a buscar los votos necesarios por la vía de las concertaciones y negociaciones, lo que lógicamente le ha implicado costos.

Al iniciarse el año anterior, el Ejecutivo no había conseguido los votos para la aprobación del Presupuesto General de la Nación y, tal como el precepto constitucional lo prescribe, se abrió el nuevo ejercicio con las cifras presupuestarias del año anterior. Es hasta el 22 de enero, cuando las diferentes fracciones que componen la Asamblea aprobaron por un monto mayor de los 16,000 millones de colones.

En el mes de marzo, las diferentes fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa entranpan el nombramiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que fue electo hasta el 2 de julio, en un proceso negociador sobre la persona propuesta, que dejó serias dudas sobre la transparencia de la elección, y la fuerte sospecha de negociaciones interpartidarias bajo la mesa. El FMLN, que inicialmente había dado su apoyo al candidato, se retracta a escasos días al conocerse las denuncias de algunos sectores sobre actuaciones de éste

reñidas con la ética del cargo. Pese a todo, el 30 de julio, el partido ARENA y otros partidos de oposición ratifican el nombramiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Ese mismo día, el Partido de Conciliación Nacional renueva el control de la Corte de Cuentas de la República, el organismo contralor del Estado, mediante un nuevo nombramiento a favor de una importante figura de ese partido.

Los hechos mencionados anteriormente apuntan hacia la existencia de acuerdos entre el partido oficial y partidos afines, para mantener el control de dos importantes instituciones en alguna medida claves en el próximo evento electoral. Dos instituciones controladoras del Estado quedaron alejadas de la oposición, mientras la acción gubernamental enfrentaba serias acusaciones de corrupción y de relativa tolerancia hacia grupos de violencia política.

El 26 de marzo, la oposición política se niega a aprobar un préstamo de 58 millones de colones para proyectos del Ministerio de Educación, argumentando que los fondos necesarios podrían tomarse de los recursos generados por la venta de las distribuidoras de energía, sin recurrir a un mayor endeudamiento externo. Posteriormente, el 5 de junio, después de debates y exigencias en cuanto al destino de los fondos, se decidió su aprobación.

En este ambiente de medición de fuerzas, el Presidente de la República vetó el 13 de agosto las Reformas al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), aprobadas por los partidos de oposición. La defensa de la autonomía municipal y de la descentralización sostenidas por el gobierno y el partido ARENA entra en contradicción y con el veto niega los principios defendidos. Algunas explicaciones relacionan el veto con la pérdida que sufriera

ARENA de muchos gobiernos locales en las últimas elecciones municipales (el partido oficial perdió muchos gobiernos locales). El 21 de ese mismo mes, el Ejecutivo vetó una reforma a la Ley de Pensiones.

A finales de año, nuevamente la Asamblea Legislativa se manifiesta en contra del Proyecto de Presupuesto General de la Nación propuesto por el Ministerio de Hacienda, argumentando que se encuentra desfinanciado y que se propone una emisión de bonos que no siguió los procedimientos legales establecidos, además de no haberse determinado con claridad las reglas de juego a la que estará sujeta dicha emisión.

En sentido positivo, el hecho de que la Asamblea Legislativa no sea del dominio de una tendencia en exclusiva favorece el proceso democrático, pese a que persistan prácticas viciadas que no permitan el beneficio de amplios sectores populares. La realidad es que los partidos responden a intereses particulares y la óptica de las decisiones generalmente se encuentra fuertemente influenciada por dichos intereses. Los largos debates, las posiciones y los planteamientos discutidos públicamente permiten cada vez más la generación de opiniones sobre la labor de los partidos, sus condicionamientos, los sectores a los que protegen y, especialmente, se evidencia en qué medida se atienden las necesidades de los votantes. Esto constituye, quiérase o no, parte de la impresión que el ciudadano lleva consigo en el momento de la emisión de un nuevo voto.

3. La acción colectiva en el ámbito de la política

3.1 *La recomposición de los partidos políticos en función de las elecciones.*

La perspectiva de un cambio en el Ejecutivo en el 99, llevó a los partidos políticos a efectuar internamente

modificaciones requeridas para un eventual triunfo en la contienda electoral para presidente y vicepresidente de la República. Los problemas más acuciantes: el desempleo, la pobreza y la delincuencia han obligado a los dirigentes políticos a modificar el contenido de sus discursos, especialmente a los de derecha. La búsqueda de candidatos con credibilidad para apostar a la solución de los problemas, ocasionó modificaciones en las dirigencias partidarias con un sentido de mercado y de control interno, provocando crisis entre sus élites, mucho más evidente en los dos partidos mayoritarios: ARENA y FMLN.

ARENA se adelantó con la elección temprana de su candidato a presidente y cambios en la cúpula dirigencial; sorprendió a todos y hubo manifestaciones internas de inconformidad que encontraron pronta resolución. El FMLN se atrasó y evidenció un errático y tardío comportamiento, que dejó dudas sobre la capacidad de sus dirigentes de concertar internamente en función de objetivos políticos comunes y lo que esto significa si llegase a la presidencia. Finalmente, después de varios eventos públicos se llegó a la definición de una fórmula que reveló diversas tendencias en el seno del FMLN, y lo que es más grave, una crisis que afectó seriamente la decisión final. El FMLN demostró no estar listo para aceptar un candidato de afuera del partido por muy cercano que éste fuera.

El resto de partidos igualmente experimentó problemas en la selección de candidatos, en la definición de sus dirigencias, en el financiamiento de sus campañas, en abruptos cambios de estrategias electorales. Al finalizar el 98, no tenían significación a nivel electoral, y la contienda se polarizaba en los dos partidos mayoritarios: ARENA y FMLN.

La tesis de los partidos pequeños: no es posible ganar la presidencia de la

República pero sí captar votos para el intercambio político en una eventual segunda vuelta. Los partidos pequeños están en posibilidad de conseguir votos frustrados o atraer a los abstencionistas. La venta de figuras o planteamientos atractivos se convierte en los fundamentos de su estrategia. Queda por ver cuánto de ilusión y realidad tienen estos planteamientos.

3.2 *La crisis de credibilidad política*

Esta acción política se realizó en una creciente crisis de credibilidad política que lleva ya unos diez años. El indicador más evidente de este fenómeno es el incremento del abstencionismo electoral superior al 40%. La falta de credibilidad en los políticos, en los partidos como instituciones preocupadas por el bienestar social, en el sistema mismo como vía adecuada para garantizar la solución de los problemas de la población, es poco funcional para la democracia y el cambio del sistema político en su conjunto.

Entre las causas se encuentran la falta de capacidad profesional de los políticos, hechos al vapor en partidos clientelistas, la demagogia de los discursos políticos, la incapacidad práctica para resolver los seculares y más agudos problemas de la población, los hechos de corrupción que llegan a conocimiento del público, la venalidad de funcionarios y partidos, así como la verificación de los electores que las decisiones procesadas por el sistema político han favorecido directamente sólo a grupos económicos fuertes que están tras las acciones políticas.

El 98 mostró que la indiferencia y la apatía popular son un mal signo para un incipiente proceso democrático, especialmente para un país que conmemora apenas 7 años de un Acuerdo de Paz, que ofrecía las expectativas de una nueva sociedad. Está claro que la construcción de un nuevo orden social no se hace de la

noche a la mañana, pero también es claro que hay una ética en las acciones políticas que permita establecer las transformaciones necesarias en un futuro previsible.

Las elecciones previstas para el 7 de marzo de 1999, están amenazadas por un gran abstencionismo que podría deslegitimar la consulta y también previene sobre el escaso apoyo que pueden encontrar los planes de gobierno. El peligro que ello representa es que amplios sectores de la población puedan escoger opciones diferentes, muchas de ellas fuera del marco institucional establecido, para solventar sus necesidades.

3.3 *El inicio de la campaña política*

Las características más significativas del proceso electoral que se han dado en el 98:

1. Ningún partido, inicialmente, estuvo de acuerdo con el candidato elegido. Francisco Flores tuvo resistencia en algunos grupos que luego terminaron aceptándolo. Facundo Guardado aún no termina de atraer a importantes sectores y dirigentes de su partido. Parker, de la Democracia Cristiana, fue rechazado por grupos de militantes descontentos. LÍDER tuvo que cambiar su candidato a la presidencia, etc.
2. El PCN definió sus candidatas, pero a última hora sustituyó el candidato a la Vicepresidencia. El resto de partidos pequeños han presentado candidatas sin mayor pena ni gloria, y uno de ellos se retiró de la contienda aduciendo no contar con los recursos financieros necesarios para participar.
3. En este sentido, es posible señalar un bajo nivel de liderazgo y definición en las líneas de acción partidaria, las recurrentes luchas internas entre

grupos dominantes y una escasa visión estratégica nacional.

4. Los programas de gobierno de los partidos en contienda tampoco se han dado a conocer a la ciudadanía, en gran medida porque no se tenían preparados. Al final del año, ningún partido ha presentado un plan de gobierno. Pareciera ser que el plan de gobierno depende más del enfoque del candidato que de una consistente línea política partidista. La personalidad, la inteligencia, la facilidad de palabra y alguna certidumbre ética sustituyen todavía a los programas de gobierno como aproximaciones a la realidad en la que se pretende operar. Esto establece una relación estrecha entre candidato-persona y la orientación del partido, que tiene el peligro de contribuir a una demagogia ocasional sin certidumbre real de soluciones.
5. La campaña presidencial para 1999 se volvió a polarizar entre ARENA y el FMLN. Los partidos menores: PCN y PDC, que en conjunto no alcanzan ni el 10% de los votantes, están apostando a que los partidos mayoritarios no van a lograr una victoria definida en la primera vuelta y que, en una segunda vuelta, las posibilidades de vender su fuerza electoral son propicias para obtener ganancias que se traduzcan en participación en el gobierno, algunas prebendas y recursos financieros.

La campaña ha sido calificada como pobre y deslucida. No se siente fuerza programática, de expectativas y tampoco se evidencia un liderazgo personal convincente. El voto duro de cada partido es más importante en la medida en que la apatía gane mayor espacio; pero lo verdaderamente preocupante es que, en tales circunstancias, la capaci-

dad de gobernar se debilita, pues el respaldo popular necesario para la adopción de medidas trascendentales, que se requieran para enfrentar los serios problemas nacionales, no está presente.

3.4 *Las concesiones entre los partidos de derecha*

Las negociaciones interpartidarias no son nada nuevo; son alianzas normales en la vida política en función de objetivos y enfoques compartidos o intereses definidos. El problema reside cuando estas alianzas son utilizadas para conseguir propósitos lesivos a la sociedad, para garantizar intereses de clases o grupos de poder en detrimento de los demás grupos sociales o cuando sirven para imponer medidas anti-populares.

También son cuestionables cuando se compran los votos por remuneraciones financieras, cuotas de poder o se otorga el manejo de instituciones importantes. En la práctica, se ha visto el uso de estas herramientas con alguna frecuencia en los nombramientos de algunos funcionarios, en la promulgación de algunas leyes que requieren de mayoría simple para su aprobación, en la aplicación de ciertas medidas impositivas, etc. Es más difícil esta práctica cuando se requiere de mayoría calificada, tal como lo establece la Constitución, como en el caso de la aprobación de préstamos extranjeros. Recientemente, algunos diputados han denunciado que fueron objeto de soborno por sus votos en determinados temas.

La estructura de la Asamblea Legislativa, integrada por dos partidos mayoritarios que no obtienen una mayoría por sí solos, deja obvias oportunidades de negociación de votos. El mercado es muy amplio para la derecha y prácticamente cerrado para la izquierda, que actualmente no cuenta con los recursos suficientes para competir.

Ello ha definido una relación muy estrecha entre el partido de gobierno y los partidos pequeños de la misma orientación ideológica que, pese a ser de la misma línea, sí tienen una clara visión del valor de su concurrencia en el mercado. Facilita la adopción de algunas medidas, pero debe pagarse el precio. Esta modalidad, como ya se ha expresado anteriormente, pretende ser ejercitada en las próximas elecciones presidenciales, si se necesitan alianzas. No cabe de duda de que la efectividad en este caso es relativa, pues los partidos no tienen, cualquiera que sea, un voto de obediencia total, especialmente cuando se intuye que los beneficios quedan en muy escasas manos de las cúpulas partidarias. Los partidos pequeños saben con certeza que no tienen opciones de triunfo, pero con igual certeza saben que la ausencia de una mayoría definida favorece su presencia.

II. La acción colectiva y los conflictos en torno al control social

En 1998, el marco del control social se continuó al aprobar el Código Penal y Procesal Penal que, muy rápidamente, en el transcurso de seis meses, fue reformado por no ser un instrumento idóneo en la lucha contra el crimen. La nueva normativa fue criticada por su "suavidad" en contra del delincuente y por ser un marco legal ideal para un país con mayor desarrollo y en una fase menos aguda de criminalidad que El Salvador. Esta discusión aún no está cerrada y las reformas seguirán formulándose en la medida en que los índices de la criminalidad no cedan.

Otros aspectos importantes del control social fueron las distintas propuestas y acciones policiales, que se hicieron a lo largo del año y que mostraron muy poca efectividad, al grado que se llegó a la propuesta presidencial de ampliar la participación de la Fuerza Armada en la lucha contra

la delincuencia. El apareamiento de la deliberación pública es también muy importante para la participación ciudadana, pero también para la formación de los horizontes de la ciudadanía y la ampliación de los espacios del control social y de la opinión pública efectiva.

1. La seguridad pública

En efecto, el problema delincencial y sus secuelas sobre los ciudadanos, ocupa un primer lugar en las encuestas de opinión, cuando se enumeran los urgentes problemas por resolver en el país. La infructuosa lucha contra la delincuencia acusa alguna impotencia institucional para frenar una ola indetenible de asaltos, robos, asesinatos, secuestros y toda clase de bandidaje posible.

La Universidad Centroamericana, en un pronunciamiento publicado en *El Diario de Hoy* del 27 de diciembre de 1998, plantea: "No hay que pasar por alto el señalamiento del fracaso de las autoridades en la preservación de la seguridad pública." ... "Una de las instituciones que no puede dejar de mencionarse es la Policía Nacional Civil, la cual no ha asumido, en muchos momentos, el papel que le corresponde en la sociedad salvadoreña actual." Dicho comunicado también señala algunos factores sumamente importantes que explican y condicionan parte de la impotencia en controlar una creciente delincuencia: vinculación de efectivos policiales al mundo del crimen; complicidad de agentes con actividades criminales de diverso signo; conflictos irresueltos entre los mandos superiores y los de la Academia Nacional de Seguridad Pública; predominio de las decisiones

de carácter político sobre las de carácter estrictamente policial y negligencia y resistencia al cambio por parte de un sector importante del organismo policial.

Los problemas económicos y sociales que bordean la delincuencia tampoco han recibido la atención que merecen; un ensayo publicado por la revista ENTORNO, de la Universidad Tecnológica, hace algunos planteamientos básicos del fenómeno: la multiplicación demográfica, la migración del campo hacia las ciudades, la escasez de oportunidades de empleo, los crecientes niveles de insatisfacción humana como resultado de una fuerte presión del consumo de bienes, la falta de incentivos para el desarrollo del sector agrícola, la transcultura con su

fuerte matiz de drogas y pandillerismo, son el caldo de cultivo de la ola delincencial que arrolla la convivencia social.

Una adecuada política de seguridad social es urgente, pero las causas que provocan la criminalidad, que se encuentran en el tejido social, tienen

que ser resueltas en el próximo ejercicio de gobierno. 1998 fue un año de fracasos en este tema, y lo que es peor, no deja perspectivas alentadoras de acciones responsables y efectivas. Este cáncer es un freno al desarrollo posible, y solamente puede ser afrontado en el marco de una política social amplia y coherente.

2. Un proceso de formación de la nueva vida pública salvadoreña

En los últimos seis meses del 98, a lo largo y ancho del país, tuvieron lugar pequeños grandes foros en los cuales la opinión y la participación ciudadanas adquirieron dimensiones públicas

La infructuosa lucha contra la delincuencia revela impotencia institucional para frenar el bandidaje

nunca antes alcanzadas. En efecto, provenientes del gobierno y de la sociedad política —de los partidos políticos, en especial— se generaron iniciativas de consulta a la sociedad civil. El candidato electo de ARENA, por ejemplo, realizó consultas con diversos grupos —relativamente plurales y el FMLN, asimismo, lo hizo con sus bases y con sectores socioeconómicos diversos para elaborar su programa de gobierno.

Por otra parte, las encuestas proliferaron en tanto se acercaban las elecciones presidenciales para captar la opinión pública al respecto, mientras los medios de comunicación aumentaron en forma creciente sus espacios de entrevistas a ciudadanos de a pie. Organismos como ProChalate, ADEL y Funda Lempa llevaron adelante una ambiciosa consulta con veintidós unidades ambientales para diseñar en forma participativa el Plan de Manejo Ambiental de Chalatenango.

En este contexto, apareció la consulta ciudadana dirigida por la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) sobre el Plan de Nación como la de mayor impacto en este orden de cosas, con una movilización muy grande de ciudadanos y de opiniones. Varias decenas de ciudadanos —entre ellos profesionales que formaron mesas especializadas de discusión— participaron y adquirieron una fuerte dinámica en el planteamiento de los problemas y soluciones que afectan sus vidas y el desarrollo nacional. En ciertos sectores hubo gran entusiasmo por el grado de participación alcanzado y las consecuencias que sus propuestas puedan provocar en el rumbo del desarrollo socio-económico y político del país.

¿Qué representa este novedoso fenómeno social para el desarrollo y la transición democrática salvadoreña? ¿Estamos frente a la constitución de un fuerte movimiento nacionalista en marcha? ¿Podrá este movimiento social

convertirse en el principal impulsor del desarrollo y de la constitución de la nación? ¿O estamos frente al proceso de formulación colectiva de un procedimiento para la formación de la vida y la razón públicas? Es importante aproximarse a una respuesta posible para “calibrar” el alcance de esta importante experiencia.

Sin descartar la posibilidad del desarrollo de un movimiento social concreto, algunos de los rasgos del hecho, tales como la heterogeneidad geográfica, social, cultural y de objetivos de esta iniciativa; la aún imprecisa definición de líderes; los inexistentes canales de delegación o representatividad entre los participantes y el resto de ciudadanos; las limitadas formas organizativas internas y de las redes de comunicación entre los diferentes grupos territoriales; la indefinición de actores con los cuales interactuar o enfrentarse; la inexistencia de estrategias para su institucionalización, adelantan las dificultades para que estos grupos se transformen, en un tiempo razonable, en una fuerza social con peso propio.

Más bien, estaríamos frente a otra acción colectiva tan importante o más que la constitución de un movimiento social. Asistimos a un acto masivo de deliberación pública de la ciudadanía salvadoreña sobre temas de su interés común y que estaría señalando, por un lado, el fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado y la sociedad política, que alejados de aquella, necesitan ahora volver a los requerimientos sociopolíticos de los ciudadanos. Es una acción interactiva, horizontal (entre iguales) y no vertical (entre los que tienen y los que no tienen algún tipo de recurso), y pública, por medio de la cual la ciudadanía asume la responsabilidad por sus problemas comunes.

Por primera vez participaron ciudadanos que, aunque puedan perte-

necer a un partido político, no apelan a su militancia política o ideológica sino a su carácter cívico para presentar opciones sobre los propósitos y dirección de sus respectivas comunidades. Durante el primer semestre del año, los ciudadanos han formulado planes para sus comunidades y han ordenado y priorizado sus concepciones para presentarlas a los partidos políticos y al Estado. No está muy claro a quién entregarán sus propuestas y quiénes las convertirán en políticas públicas reales. ¿Lo harán por sus propios medios? En todo caso, podrán seleccionar eventualmente las ofertas de los partidos que mejor interpreten sus planteamientos en los programas de gobierno y otros planteamientos generales. Así, por medio de la deliberación pública, los ciudadanos producen juicios públicos, identifican sus propósitos colectivos y sientan las bases para la acción pública.

La vida pública está constituida por redes de asociaciones cívicas muy diversas, normas de reciprocidad muy funcionales que llevan a la solidaridad y confianza social, y tienen como resultado altos niveles de cooperación voluntaria. Al establecerse una vida pública sana y una deliberación pública amplia, tiende a formarse lo que los liberales llaman la razón pública, un poder intelectual y moral enraizado en las capacidades de sus integrantes para plantear y gestionar sus necesidades. Es en este proceso donde la ciudadanía reconoce los parámetros del bienestar social del público válidos para un período determinado o, en otras pala-

bras, la concepción de la justicia básica a la que la sociedad cree tener derecho para realizar sus aspiraciones; justicia básica a la cual las instituciones, propósitos y finalidades del Estado y gobierno, deben servir. Es un intento de catalizar la acción pública incluyendo los esfuerzos directos de los ciudadanos y el esfuerzo gubernamental.

Nombrar y discutir los problemas de una comunidad, establecer sus prioridades, reconocer las formas de cómo plantearlos y realizarlos, permite a la gente construir un sentido de destino compartido, que es el primer paso del ciudadano para asumir la responsabilidad de lo que pueda sucederles como comunidad. Esto dará paso eventualmente a la formación de las relaciones públicas de las comunidades que hacen opciones y decisiones conjuntas para actuar en conjunto. En este sentido, la deliberación pública es un proceso de decisión que se vincula a la acción pública.

Establecer el proceso de discutir sobre la justicia básica (social, económica y política), para los ciudadanos de tal forma que se convierta en un hábito y que se adopte como una práctica permanente, que tiene valor en sí mismo, es un gran paso para mejorar la forma de hacer las cosas en una comunidad, para desarrollar las normas que promuevan más cooperación y para generar un mayor sentido de comunidad. Esto es, comenzar a construir las bases de la nación.

TERCERAS VOTACIONES INFANTO JUVENILES

7 de Marzo de 1999



Universidad Tecnológica

La Gran Universidad de El Salvador



III Votaciones Infanto Juveniles

Universidad Tecnológica de El Salvador

7 de marzo de 1999



Resultados Generales por **DERECHOS DE LA NIÑEZ**

TENEMOS DERECHO A...

PRIMER LUGAR

- *Que nadie haga con nuestro cuerpo cosas que no queremos.*

SEGUNDO LUGAR

- *No trabajar antes de la edad permitida.*

TERCER LUGAR

- *Vivir en un lugar donde el aire, el agua y la tierra estén limpios.*
- *Tener un nombre, una nacionalidad y una familia.*
- *Recibir educación.*
- *Participar en la vida cultural y artística.*
- *Recibir alimentación, atención médica adecuada y a tener una vivienda digna.*
- *Decir lo que pienso y siento, para que me escuchen.*
- *Recibir el trato justo, que todas las niñas y niños merecemos respetando nuestras diferencias.*
- *Tener libertad de pensamiento y religión.*
- *Jugar, descansar y practicar deportes.*

ESCUCHEMOS A LOS NIÑOS...



PARTICIPACION CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

37

Por: Gabriel Siri

1. Aspectos Conceptuales

La participación de las organizaciones de la sociedad civil en proyectos del estado y del sector empresarial privado constituye el vínculo operacional principal entre estos tres grandes sectores en que puede clasificarse la sociedad. Proyectos con participación comunitaria contribuyen a establecer y, en algunos casos, a institucionalizar el diálogo entre estos sectores –y permiten aunar esfuerzos en el logro de objetivos comunes. La participación comunitaria: i) da por resultado proyectos mejores y más sostenibles, ii) contribuye a la reforma del Estado, haciéndolo más efectivo y democrático, iii) vuelve más sólido y equitativo el desarrollo del mercado y, iv) fortalece a la propia sociedad civil.

Gabriel Siri
preparó este
documento
bajo consultoría
del Banco
Interamericano
de Desarrollo

PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL SECTOR PUBLICO Y EN EL SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO CONSTITUYEN LOS PRINCIPALES VINCULOS ENTRE LOS TRES SECTORES DE LA SOCIEDAD.



2. Qué se logra con la participación

La participación presupone la toma de conciencia de una comunidad que con su propio esfuerzo puede resolver gran parte de sus problemas sociales y económicos. La participación es mucho más que una actividad puntual de cooperación de la población en la ejecución de un proyecto gubernamental, mediante la cual se logran beneficios cuantificables. Se trata más bien de un cambio de actitud



conducente a llevar una comunidad de una situación de aislamiento pasivo y dependiente a un proceso de acción conjunta organizada. Es por ello que los beneficios que ésta genera se miden no solo en términos de "valor agregado" sino en cambios cualitativos, en particular, en el desarrollo institucional de las organizaciones de la sociedad civil y en la ampliación de la capacidad de autogestión de las comunidades.

En los párrafos que siguen se enumeran sucintamente los beneficios que genera la participación tanto para los proyectos de

desarrollo como para el Estado, el sector empresarial, y la propia sociedad civil. Como ejemplos de las ganancias que pueden obtenerse, se incluyen en cada sección recuadros ilustrativos de experiencias exitosas de participación. Los ejemplos corresponden a algunos de los estudios de caso que fueron preparados para el Seminario sobre Programas Sociales, Pobreza y Participación Ciudadana celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, en marzo de 1998, con ocasión de la XXXIX Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID.

i) Aumento de la eficiencia, efectividad, y sostenibilidad de los proyectos

La participación de los beneficiarios en la identificación, ejecución, y monitoreo de un proyecto conducen a que la comunidad se sienta dueña de la obra. Cuando una comunidad hace suyo un proyecto —eso es, cuando los vecinos entienden de qué se trata y respaldan su ejecución— la efectividad de la operación mejora y aumentan las posibilidades de que los beneficios que ésta genera sean sustentables. Por otra parte, aportes directos de los beneficiarios a un proyecto constituyen recursos adicionales a las asignaciones de gasto público.

Asimismo, la participación de los vecinos de una comunidad en la selección y conceptualización de un proyecto tiende a orientarlo hacia necesidades reales. Ello es de particular importancia, dado que las carencias más apremiantes de las comunidades pobres frecuentemente se dan en áreas poco atendidas por los gobiernos (por ejemplo, en el sector informal, en localidades aisladas, en pequeños proyectos que requieren atención directa, etc.). El adecuar la oferta de proyectos a las demandas de las comunidades mediante la participación de futuros beneficiarios, es un instrumento de tecnología social que la participación comunitaria ha introducido en años recientes en muchas de las operaciones de inversión pública de los gobiernos latinoamericanos.

Cabe señalar que la obra pública con participación de la sociedad civil es generalmente más intensiva de mano de obra, y en particular, de mano de obra poco calificada. Dado que el desempleo —y el subempleo— de la población pobre es generalmente alto, proyectos participativos tienden a mitigar uno de los problemas socioeconómicos más apremiantes de la región. Las contribuciones de las comunidades en términos de mano de obra (el factor relativamente más abundante para los pobres) se transforman en capital físico (el factor más escaso).



En suma, los proyectos funcionan mejor cuando su ejecución y operación dependen no solo del apoyo del Estado sino de la colaboración de la comunidad beneficiada. La sola asignación de recursos públicos no garantiza que los proyectos van a ser mantenidos y puestos en operación adecuadamente. El apoyo de la población local es conducente a aumentar la eficiencia en la ejecución de una obra y esencial para asegurar su sostenibilidad.

Existe amplia evidencia de que esta conclusión es válida. Los estudios de caso presentados por el BID al Seminario de Cartagena sugieren que

el alto contenido de participación de la sociedad civil ha tenido que ver con el éxito de estos proyectos. Los diversos estudios que se han hecho sobre los fondos de inversión social en América Latina también llegan a los mismos resultados. Posiblemente el estudio cuantitativo más extenso sobre la contribución que la participación de los beneficiarios genera en proyectos de desarrollo, es el análisis estadístico de 121 proyectos rurales de suministro de agua en 48 países que realizó el Banco Mundial en 1994. Los resultados del estudio demuestran que los beneficios que añade la participación son estadísticamente significativos. La participación contribuye sustancialmente a mantener los sistemas en buena condición, a ampliar los beneficios económicos globales, a aumentar el porcentaje de población cubierta, y es el factor más importante en explicar la calidad de la implementación de los proyectos.

Proyectos manejados por ONG demostraron ser los más exitosos

i) Fundación para la Promoción de la Salud, "FUNDASALUD", Venezuela

La iniciativa constituye una alianza entre el gobierno regional y la sociedad civil, creada con el propósito de mejorar los servicios de salud en el estado de Lara. El estudio de caso analiza uno de los programas de FUNDASALUD (los centros ambulatorios) en que los vecinos de la comunidad contribuyen activamente en la prestación de servicios. La fundación fue creada en 1990 bajo el liderazgo de un médico privado, y funciona con métodos operativos de una empresa privada. Su diseño responde a la transformación del modelo estatal tradicional de prestación de servicios que está dándose hoy día en América Latina –hacia un modelo menos centralizado, más orientado a atender las demandas de los beneficiarios, y más abierto a la participación de la sociedad civil.

El estudio de caso compara los resultados de distintos centros ambulatorios de salud, con o sin el componente de participación, y evidencia que la contribución de la comunidad mejora significativamente el mantenimiento de los servicios, promueve una mayor asistencia a los centros ambulatorios y baja el costo por paciente atendido a menos de la mitad. La opinión de los beneficiarios sobre la calidad de los servicios que prestan los centros y sobre el personal médico es muy

favorable. Cabe señalar que los centros médicos son atendidos principalmente por mujeres y sirven también mayormente a mujeres.

ii) Educación con Participación de la Comunidad, "EDUCO", El Salvador

EDUCO es un programa gubernamental creado en 1991 con el objetivo de ampliar la cobertura de la educación parvularia y básica en las comunidades rurales más pobres del país. El nuevo sistema educativo rural ha logrado ya presencia en casi todos los municipios del país. El programa está enmarcado dentro de políticas gubernamentales de descentralización y de asignación prioritaria del presupuesto social a la educación básica. Como indica su nombre, el eje central de esta iniciativa es la participación comunitaria en el proceso educativo. EDUCO está bajo el control de una asociación de padres de familia que es responsable de administrar los servicios –incluyendo la contratación de maestros– en las distintas localidades. El programa ha recibido fuerte apoyo de organismos financieros internacionales.

Los resultados del programa evidencian que la cobertura, la eficiencia, y la efectividad de la educación parvularia y primaria tienden a aumentar en la medida que los padres de familia se involucran en el manejo de las escuelas. La participación ha generado en las comunidades un sentimiento de "pertenencia" del programa y las ha acercado a las escuelas. Los padres y madres de familia no solo participan en el funcionamiento de las escuelas sino que se involucran más en la educación de sus hijos, y valoran más la educación como mecanismo para abrir oportunidades de ascenso económico y bienestar social. Asimismo el programa está contribuyendo a transformar a las comunidades, aumentando su capacidad de acción organizada y su sentido de responsabilidad.

iii) Fortalecimiento de la propia sociedad civil

Los beneficios que la participación genera van más allá de los productos tangibles que resultan de los proyectos. Resultados en términos de autoestima, confianza en capacidades propias, consolidación de redes de apoyo mutuo, etc. vienen a satisfacer intereses no menos importantes para las comunidades.

La Participación crea conciencia en las comunidades del potencial que tienen para transformar aspiraciones legítimas en realizaciones concretas. A través del proceso de concepción y ejecución de proyectos, una comunidad amplía su capacidad gerencial y operativa para resolver problemas por cuenta propia. La práctica de hallar soluciones a problemas fomenta la organización de las comunidades y consolida liderazgos incipientes. En suma, la participación contribuye a transformar comunidades acostumbradas a depender del Estado en motores de su propio desarrollo.

Por otra parte, la intermediación en proyectos participativos proporciona a las organizaciones de la sociedad civil financiamiento para sus gastos de operación y posibilidades de adquirir capacitación –y de esta manera contribuye a asegurar su sobrevivencia. Las ONG generalmente requieren de subsidios para su sostenimiento, y su capacidad de obtener recursos suele ser el factor que limita el alcance de sus operaciones. El Estado ha sido una fuente importante de financiamiento para servicios que prestan las ONG en la ejecución de proyectos. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil han recibido tradicionalmente fuerte apoyo de la comunidad internacional, tanto en términos de fondos concesionarios por parte de gobiernos y de instituciones financieras internacionales, como de ayudas de "pueblo a pueblo" provenientes de ONG externas, grupos religiosos, etc. Algunos países donantes han utilizado

extensamente este canal de financiamiento como instrumento para llegar más directamente a los pobres. Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha proporcionado respaldo político a organizaciones de la sociedad civil y ha fomentado su participación en proyectos del Estado y del sector empresarial moderno.

Durante la presente década, el financiamiento de donantes externos a las ONG ha caído significativamente, precisamente en un periodo en que la sociedad civil ha adquirido mayores responsabilidades en la prestación de servicios públicos. Por ello, después de una fase de extraordinaria expansión, las ONG están atravesando una etapa crítica de restricciones financieras.

Cabe subrayar que algunas operaciones del Estado y del sector empresarial están explícitamente dirigidas a apoyar la acción cívica autónoma de las organizaciones de la sociedad civil. Sus objetivos se centran en aumentar la capacidad institucional de la sociedad civil – más que en realizaciones de obra física. Un proyecto explícitamente dedicado a fomentar el desarrollo de la sociedad civil organizada es el Centro Mexicano para la Filantropía, el cual está patrocinado por el sector empresarial privado (véase recuadro a continuación).

41

Centro Mexicano para la Filantropía, "CEMEFI", México

El Centro fue creado en 1988 con los siguientes objetivos: i) fomentar una cultura de cooperación ("mira por los demás") en la población mexicana y, en especial, una mayor responsabilidad social en el sector corporativo; y ii) promover el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. CEMEFI opera en las áreas de investigación, promoción, y desarrollo institucional, y ha establecido mecanismos amplios de intercambio de información. La institución tiene reconocido prestigio como centro de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, y entre éstas y los empresarios, las autoridades gubernamentales, y la prensa.

Los beneficios que genera el Centro se miden en función de logros en el fortalecimiento de la sociedad civil y en el establecimiento de lazos de cooperación entre diversos sectores de la sociedad. Además de generar beneficios en términos del desarrollo de una cultura de altruismo al interior del sector corporativo de la sociedad mexicana, el Centro ha tenido considerable éxito en acercar a la sociedad civil organizada al gobierno y al sector empresarial privado.

ii) Apoyo a la reforma del Estado y al desarrollo de la democracia participativa

La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones con respecto a los proyectos del Estado es en sí un ejercicio de democracia participativa y a la vez es conducente a aumentar su intervención en otros aspectos del proceso democrático. Cuando una comunidad sale de una situación de apatía y dependencia y entra en un proceso de acción cívica, amplía paralelamente su interés por entrar en una dimensión social y política más amplia. El caso del Presupuesto Participativo de Porto Alegre ilustra muy bien la transformación profunda que puede sufrir una municipalidad cuando se le da voz a la comunidad.

Presupuesto Participativo de Porto Alegre, Brasil.

Fundado en 1989, el programa, busca aumentar la participación de la población en la asignación de los gastos de inversión del presupuesto municipal de Porto Alegre. La iniciativa es manejada por un "consejo" informal, independiente del gobierno. La población ejerce control sobre los procedimientos administrativos, el manejo de recursos, y en general, el desempeño del aparato gubernamental en

este campo. Sin embargo, el objetivo del programa no es reducir el espacio público sino volverlo más transparente y efectivo. El programa tiende a generar una mayor equidad distributiva, transfiriendo recursos recaudados en localidades de mayor ingreso de la municipalidad hacia inversiones en barrios pobres. El paradigma central del programa es el respecto a la libertad de asociación de la población y a su derecho a plantear demandas en función de intereses propios.

Quizás la contribución más importante de la intervención de la comunidad es la mayor "focalización" del gasto público hacia necesidades reales de la población. La iniciativa ha logrado involucrar a la comunidad en la solución de los problemas de desarrollo del municipio e incorporar a la población en un proceso de democracia participativa. Por otra parte, la participación activa de la comunidad ha promovido el establecimiento de reglas transparentes para el manejo del presupuesto municipal, y una mayor vigilancia de la gestión pública por parte de la población conducente a evitar el clientelismo y la corrupción.



Asimismo, las organizaciones de base que responden al voto de sus miembros (e.g., "grassroots organizations", asociaciones gremiales, comunidades indígenas, etc.) son pequeños núcleos de práctica democrática que movilizan a las comunidades alrededor de intereses comunes y defensa de derechos. El desarrollo de la democracia participativa es un objetivo importante en sí y un componente esencial de la reforma del Estado. El estudio pionero de Robert Putnam, *Making Democracy Work* (1993) concluye que a mayor grado de acción cívica organizada, mejor la calidad del gobierno.

Por otra parte, la acción cívica crea las condiciones —y a la vez, las presiones— conducentes al establecimiento de un verdadero estado de derecho. Asimismo, proyectos con participación comunitaria estimulan el "control social" de la población sobre el ejercicio público. No obstante que la acción cívica funciona por naturaleza fuera de la política partidista, sí crea un contrapeso a la estructura de poder del Estado. La población aprende a expresar su opinión con relación a las acciones del Estado que afectan sus intereses, a demandar transparencia en la administración pública, y a poner en descubierto prácticas de corrupción.

En algunos casos los esquemas participativos tienen como objetivo apoyar procesos de pacificación y hacer más viable la gobernabilidad de los países —condición indispensable para consolidar un programa de desarrollo. Las comunidades están más dispuestas a respaldar programas gubernamentales cuando comprenden su razón de ser y han participado en su formulación. A la vez, los proyectos con participación comunitaria constituyen mecanismos para ventilar y resolver conflictos de intereses en un clima de racionalidad y pragmatismo. Las comunidades aprenden no solo a demandar derechos sino a aceptar responsabilidades.

El proceso de desarrollo de la democracia participativa se está dando en gran



medida a nivel local. Esquemas de cooperación entre municipalidades y organizaciones de base refuerzan y a la vez delimitan el ámbito operativo del Estado. La mayor participación de los beneficiarios en la ejecución y operación de los proyectos concuerda muy bien con las políticas de descentralización administrativa que están llevando a cabo los gobiernos. La descentralización acerca al nivel local las decisiones operativas de los gobiernos, lo cual facilita la intervención de las comunidades. La participación comunitaria concuerda también

43

con la premisa hoy día generalmente aceptada de "subsidiaridad" del Estado con respecto a actividades que puede hacer mejor el sector privado o las organizaciones de la sociedad civil. El principio de subsidiaridad entraña la toma de decisiones al más bajo nivel razonable. No obstante, algunas decisiones sobre la política económica y social de los gobiernos son indelegables. Asimismo, ciertos aspectos de las decisiones sobre proyectos necesariamente tienen que mantenerse a nivel central (e.g., sistemas integrados de proyectos).

Como resultado de las políticas gubernamentales de descentralización, se está dando en la región una redistribución de las esferas de influencia de los distintos sectores de la sociedad. En general, la tendencia ha sido una de apropiación por parte de las organizaciones de la sociedad civil –y del sector empresarial privado– de espacios tradicionalmente considerados dentro de la esfera del Estado. La descentralización se refiere no solo a la toma de decisiones sobre programas y presupuestos públicos sino también a la transferencia de responsabilidades a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada. La tendencia ha sido de exigir más a las comunidades en términos de trabajo voluntario, contribuciones para sufragar inversiones, y tarifas a los usuarios de los servicios.

Finalmente, cabe subrayar que la participación ciudadana en las operaciones del Estado es conducente a políticas más equitativas de recaudación y de gasto público y, en general, a políticas gubernamentales orientadas a promover igualdad de oportunidades para la población. Más aún, el diálogo de las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno contribuye a despertar conciencia sobre el problema de la pobreza en los países y a abrir nuevas avenidas de acción. El proceso tiende a crear una opinión pública informada y a incitar una mayor responsabilidad por parte del Estado. Así, la participación comunitaria puede jugar un papel catalítico importante en la ampliación del alcance de la acción social gubernamental.

iv) Fortalecimiento del desarrollo del sector empresarial privado

Tradicionalmente, las alianzas entre la sociedad civil y el sector empresarial privado han estado orientadas a ampliar y mejorar servicios sociales y humanitarios. Hoy día, sin embargo, los proyectos participativos frecuentemente buscan aumentar la productividad y el poder adquisitivo del sector privado pobre, la creación de más productores y más compradores, y en general la ampliación de la base empresarial y comercial.

Proyectos que vinculan a la sociedad civil organizada con el sector empresarial privado están generalmente "focalizados" hacia el gran sector informal de los países –el cual absorbe más de la mitad del empleo en la región. El sector informal se extiende por todo el territorio de los países y constituye la principal fuente de ingresos de subsistencia para los pobres. Incrementos en el empleo y en las remuneraciones al trabajo en este sector pueden generar – además de beneficios en términos de mayor consumo – aumentos substanciales de los ahorros e inversiones de los pobres. La exigua participación de los sectores pobres en el proceso de formación de capital es una de las características del subdesarrollo de los países. Las inversiones en la pequeña producción o comercio tienen la ventaja de que la cadena de ingresos y gastos que generan los recursos tiende a permanecer en mayor grado en manos de la población pobre. Asimismo, el "multiplicador" del ingreso es más grande que en el caso de inversiones en la gran empresa, en parte debido a que éstas tienen un contenido de importación mucho mayor.

Cabe señalar que la práctica de acción cívica comunitaria contribuye al desarrollo del llamado "capital Social", eso es, sentido de responsabilidad social y respeto a la ley, relaciones personales más igualitarias, mayor confianza y mesura entre agentes económicos, voluntad para establecer y compartir redes horizontales de información, etc. Al mismo tiempo, la participación de la sociedad civil en actividades del sector empresarial privado puede servir de vehículo para introducir en el mercado las virtudes que caracterizan ese capital social. Poner el acento en un clima de solidaridad horizontal –manteniendo a la vez la disciplina que impone la competencia del mercado– ha demostrado ser conducente a un patrón de crecimiento productivo que es no solo más equitativo sino más sostenible. El estudio de Putnam (op.cit.) evidencia que las tradiciones cívicas pueden tener efectos muy positivos sobre el desarrollo económico, el bienestar social, y el desempeño institucional: "tanto los estados como los mercados funcionan mejor en un ambiente de acción cívica".

Ferías de Consumo Familiar "CECOSESOLA", Venezuela

El programa fue creado en Barquisimeto en el año 1984. La iniciativa asocia a grupos de productores y consumidores, con grupos de tenderos en mercados (ferias) de productos agrícolas e industriales de consumo popular. Las Ferias de Consumo Familiar están vinculadas al movimiento cooperativo y a algunas de las más grandes ONG de Venezuela. El programa enfatiza el desarrollo de una cultura solidaria y busca al mismo tiempo la eficiencia económica mediante la disciplina del mercado. Las ferias son administrativas y financieramente autónomas y, no obstante que mantienen vínculos estrechos con diversos organismos públicos, son plenamente independientes del control del Estado.

Con base a medidas de solidaridad y eficiencia, el programa beneficia a productores chicos (brindándoles un mercado estable a precios garantizados y un mayor acceso al crédito), a consumidores de bajos ingresos (mediante ahorros en la compra de bienes de consumo popular), y a trabajadores en los mercados (mediante mejores sueldos). Los recursos invertidos en el programa alcanzan altos rendimientos económicos y sociales.

3. La participación en la práctica

Como indicado en la sección anterior, la práctica de participación se "aprende haciendo", eso es, en el proceso mismo de escoger alternativas, hacer obras, prestar servicios, gestionar apoyos del gobierno o de agentes externos, etc. El manejo de programas y el logro temprano de resultados concretos mantiene el interés de una comunidad y contribuye a desarrollar capacidad institucional operativa.

Una comunidad participa cuando percibe que los beneficios que va a recibir de un proyecto son mayores que sus costos en términos de tiempo y contribuciones directas e indirectas. El beneficiario también espera que las promesas que se le hace en términos de recursos, materiales, capacitación, etc., se cumplan. Es también esencial como condición de base el establecimiento por parte del Estado de un ambiente favorable para las iniciativas de las comunidades. Sin embargo, la experiencia confirma que la participación no surge espontáneamente sino que es generada por líderes –frecuentemente no formales– que conciben y concretan iniciativas de proyectos. El liderazgo es un factor subyacente a toda la experiencia exitosa de participación; detrás de cada esquema participativo se encuentran siempre unos cuantos individuos que lo llevan adelante.

Cabe subrayar que la mujer desempeña una función clave en la movilización de las comunidades alrededor de proyectos de desarrollo. No solo constituye el vehículo central en la transmisión intergeneracional del capital humano (en educación y salud), sino ha demostrado tener gran capacidad para organizar formas asociativas de participación popular en actividades productivas y comerciales. La energía social de acción comunitaria a nivel micro es generada en gran medida por mujeres.

La participación de los vecinos de una comunidad en proyectos del Estado o del sector empresarial privado de ordinario se realiza con el apoyo y la intermediación de organizaciones de la sociedad civil. Frecuentemente estas organizaciones constituyen los principales mecanismos para generar iniciativas de interés social, movilizar demandas locales, y educir energías y capacidades latentes en las comunidades. El ámbito de acción de algunas de estas organizaciones trasciende objetivos de satisfacción de necesidades materiales inmediatas de las comunidades y se centra en abogar por transformaciones sociales y económicas que inciden sobre el bienestar de toda la sociedad. La acción cívica a este nivel generalmente entraña la coordinación entre sí de actividades de ONG, grupos de presión, organizaciones populares, etc., e inclusive han surgido iniciativas por generar una identidad colectiva (por ejemplo, en el campo del medio ambiente). Sin embargo, entrar en esta esfera de acción no significa que las organizaciones se vuelvan protagonistas de actividades de política partidista o corporaciones con fines de lucro. Ciertamente, algunas de ellas operan bajo directrices políticas o se dedican a maximizar ganancias. No obstante, corresponde a las organizaciones de la sociedad civil basar su modalidad de acción y la influencia que pueden ejercer en su carácter cívico y pluralista –no burocrático ni corporativo– y evitar integrarse al Estado o al sector empresarial.

La existencia de un gran número de organizaciones cívicas en una región crea un contexto fecundo para el surgimiento de esquemas participativos. No es casual, por ejemplo, que el estado de Lara en Venezuela, donde se ha desarrollado el Programa de FUNDASALUD y las Ferias de Consumo Familiar (véase recuadros en las páginas 8 y 16), cuente con la mayor concentración de organizaciones cooperativas en el país. Ciertamente, el aprovechamiento de la capacidad de las ONG para desarrollar y acompañar iniciativas comunitarias ha dado por resultado mejores



proyectos y mayor desarrollo institucional de la sociedad civil. Cabe señalar, sin embargo, que las ONG tienen agendas propias que no necesariamente coinciden con los requerimientos más urgentes de las comunidades— en último término son éstas las que les corresponden tomar las decisiones que tocan a su propio desarrollo.

Al respecto, es importante hacer la distinción entre ONG y organizaciones de "membresía" (controladas por sus miembros). Las primeras funcionan frecuentemente como intermediarias en la organización de la participación de las comunidades y como ejecutoras de proyectos de prestación de servicios. Las

ONG suelen contar con personal profesional calificado y estrategias propias para alcanzar resultados. Por el contrario, las organizaciones de base (o "grassroots organizations") están constituidas y lideradas por vecinos de las comunidades y representan directamente sus intereses. Cabe señalar que no son los más pobres entre los pobres que tienden a formar parte de esquemas participativos, ni tampoco son los pobres los que se benefician en mayor medida. Es por ello que los procesos participativos frecuentemente incluye programas de extensión ("outreach") diseñados para incorporar a los pobres y lograr que ellos reciban el grueso de los beneficios generados por los proyectos.

La forma en que la sociedad civil participa en alianzas con otros sectores de la sociedad es distinta según si se trata de proyectos en que el Estado es el principal protagonista, o en proyectos relacionados con el sector empresarial:

i) En proyectos gubernamentales de obra pública y de prestación de servicios, el proceso frecuentemente se da a nivel de los gobiernos locales. Generalmente, la participación se limita a la consulta con los vecinos de una localidad sobre la conveniencia de llevar adelante un determinado proyecto, y a gestionar contribuciones en términos de insumos para la ejecución y el mantenimiento de las obras (eso es, trabajo voluntario, aportes de materiales, o contribuciones financieras).

Hoy en día, sin embargo, la sociedad civil comienza a participar mayormente en la selección y supervisión de los proyectos. El aporte más valioso que puede prestar una comunidad es su conocimiento y vivencia de las condiciones y problemas locales. Ello justifica el interés de las organizaciones de base en participar no sólo en la ejecución de las operaciones sino en la toma de decisiones sobre su conceptualización y en otras fases tempranas del ciclo de proyectos —e inclusive en establecer un diálogo con el gobierno sobre la formulación y evaluación de las políticas sociales, y en la asignación de recursos. Sin embargo, en la práctica, la participación de la sociedad civil ha llegado muy poco a los niveles decisivos de la política social del Estado.

Un esquema frecuentemente utilizado por los gobiernos es dar por contrato parte o la totalidad de la ejecución de operaciones de interés social a ONG calificadas. Las ONG han demostrado ser buenas intermediarias en tareas de capacitación, en la

prestación de servicios de salud primaria y en el manejo de crédito orientado al pequeño comercio y a la microempresa. Las ONG están por vocación natural cerca de la población pobre y tienen la necesaria flexibilidad e independencia para acompañar la ejecución de pequeños proyectos con alto contenido comunitario. Es así que los esquemas de prestación de servicios que se establecen con la contribución de ONG resultan ser en muchos casos mejores que los que ofrecen las agencias ejecutoras gubernamentales tradicionales.

Hoy día se comienza a ver la labor de las ONG, y en general las iniciativas de las organizaciones comunitarias, no como una alternativa a la acción del gobierno, ni como simples manifestaciones de autodefensa de la sociedad para contrarrestar impactos negativos de políticas de ajuste estructural, sino como un complemento valioso a la acción del Estado, que le permite realizar más plenamente su responsabilidad social. Ello responde en parte a que la mayoría de los gobiernos locales –particularmente en las poblaciones muy pobres– no tienen la capacidad financiera y organizativa necesaria para absorber las responsabilidades que conlleva la descentralización del aparato estatal– en particular, el hacerse cargo de la prestación de servicios sociales. En estas circunstancias se vuelve valioso y oportuno el apoyo que pueden proporcionar las ONG y las organizaciones de base de la sociedad civil.

Una alianza "Estado-Sociedad Civil" presupone la adopción de un programa de políticas gubernamentales articulado con un proceso activo de participación comunitaria. Ello requiere, en primer lugar, una decisión política de permitir y dar buena acogida al desarrollo de la acción cívica independiente –de manera análoga como lo hace el Gobierno con el sector empresarial privado moderno. El Estado puede colaborar creando las condiciones para que el proceso se dé (eliminando obstáculos legales y de hecho, y toda discriminación) y apoyando "desde afuera" su desarrollo, e incorporando en el diseño de sus programas la contribución que puede ofrecer la participación comunitaria. De ordinario, la cooperación se lleva a cabo a través del proceso mismo de ejecución de proyectos de gasto público. Las agencias gubernamentales no tienen la competencia para organizar directamente a las comunidades– y este tipo de intervención corre el riesgo de politizarse. Obviamente, en último término, le corresponde a las comunidades ser protagonistas de su propia organización.

ii) En proyectos de la sociedad civil vinculados con el sector empresarial privado, generalmente se trata de alianzas en que organizaciones de la sociedad civil ayudan a movilizar al sector privado pobre para alcanzar mayores niveles de bienestar. La iniciativa suele venir de ONG o de fundaciones patrocinadas por empresarios motivados por objetivos altruistas. Las organizaciones de la comunidad internacional también han jugado un papel importante en la concepción y en el financiamiento de esta clase de operación.

Muchas de las iniciativas surgieron durante la década pasada como respuesta a la crisis económica que sufrió la región. A operaciones dirigidas a suplir serios deterioros en la prestación de servicios sociales, le siguieron proyectos orientados a aumentar los ingresos de sectores pobres y desarrollar su potencial para producir y comerciar. El apoyo a la expansión de la producción del sector privado pobre vino a llenar un vacío importante en un área que los gobiernos atienden muy poco.

Algunos de estos esquemas participativos están orientados al desarrollo del gran sector informal de los países –donde están los pobres– y a vincularlo con los sectores productivos y comerciales modernos. El pequeño y micro productor puede

sacar ventaja de contratos con empresas grandes que generan demandas de insumos intermedios y transfieren tecnología, y con agencias exportadoras con experiencia en la comercialización a nivel internacional. De esta manera, la microempresa puede compartir los beneficios que en algunos aspectos ha generado el proceso de globalización que está dándose en los sectores modernos de las economías de la región.

La alianza "sector empresarial-sociedad civil" presupone una actitud positiva de parte de los empresarios –la cual entraña una visión de más largo plazo. El acercamiento del sector informal productivo al mercado formal resulta beneficioso no solo para los sectores pobres de la población sino también para hacer viable el crecimiento sostenido sector empresarial moderno– mediante la expansión del mercado interno y el fortalecimiento de la cohesión del tejido social. Es así que el apoyo por esta vía de la comunidad internacional a la población pobre de los países contribuye también, de hecho, a un desarrollo más sólido y sostenible de los sectores modernos de las economías.

4. Apoyo del BID al proceso de participación y al fortalecimiento de la sociedad civil

En años recientes el Banco ha aumentado considerablemente su apoyo a proyectos con participación de la sociedad civil. Las actividades del Banco en este campo incluyen las siguientes actividades:

i) El programa de Pequeños Proyectos (iniciado por el Banco en 1978) y el Fondo Multilateral de Inversiones (establecido en 1992) tienen entre sus objetivos principales la ampliación de la participación comunitaria y el fortalecimiento de la capacidad de organizaciones intermediarias. Estos programas han contribuido a abrir el diálogo del BID con las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil (e.g., en el campo del apoyo a la microempresa) y han dado presencia institucional al Banco en las comunidades pobres de los países.

ii) Varias operaciones innovadoras en que las propias organizaciones comunitarias asumen la función de ejecutores. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz en Guatemala (DECOPAZ) y el Programa de Apoyo a la Inversión y Gerencial Social en Venezuela (PAIS). El Banco ha venido apoyando también el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, organización orientada a promover los derechos de los pueblos indígenas y a ampliar su capacidad para forjar su propio camino de desarrollo.

iii) Un amplio programa de operaciones en apoyo a los fondos de inversión social. Los fondos han sido pioneros en incorporar la participación de los vecinos de las comunidades en algunas etapas del ciclo de ejecución de los proyectos. Asimismo, muchos de los fondos han sabido aprovechar como intermediarias a organizaciones de la sociedad civil y, en algunos casos, han fomentado directamente su desarrollo.

iv) El Banco considera que los graves problemas que confrontan los países con relación al medio ambiente no tienen solución sin la colaboración de la población local. Por ello exige que en sus operaciones de préstamo se tomen en cuenta los intereses de la población que va a verse afectada –incluyendo a la población pobre más vulnerable y a las comunidades indígenas. Más aún, el Banco considera que revertir el deterioro ecológico requiere el desarrollo de una cultura ambiental en la

población, para lo cual es indispensable el concurso de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan de cerca con las comunidades.

v) Mediante estudios, talleres, y reuniones de autoridades y expertos, el Banco ha apoyado el intercambio de experiencias y la concertación de acciones en este campo. A partir de 1994 ha llevado a cabo una serie de consultas para promover consensos entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, y el sector empresarial privado. Asimismo, el Banco ha patrocinado estudios de mapeo de las organizaciones de la sociedad civil con el objeto de identificar su capacidad de apoyo al proceso de desarrollo de los países.

El Banco Interamericano de Desarrollo puede ampliar su función catalizadora en apoyo de los procesos de participación de la sociedad civil mediante las siguientes líneas de acción:

i) En consulta con los gobiernos, incorporar mayormente en el diseño de las operaciones del Banco la participación de los beneficiarios en el ciclo de ejecución de los proyectos. En enero de 1997, el Banco publicó el Libro de Consulta sobre Participación. El documento constituye una herramienta para el uso del personal del Banco que trabaja en la incorporación de la participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de proyectos, y en la formulación de planes de desarrollo.

ii) Apoyar esquemas participativos en que la sociedad civil se asocia con el sector empresarial privado. Para ello el Banco ha abierto un diálogo con instituciones filantrópicas del sector privado en los países y con otras organizaciones que trabajan en este campo.

iii) Ampliar el trato con las organizaciones de la sociedad civil y apoyar su desarrollo, respetando su autonomía y sus métodos de operación. Aprovechar el potencial que éstas ofrecen para acompañar y promover iniciativas de las comunidades.

iv) Incorporar el tema de la participación de la sociedad civil en los estudios de países y en el diálogo del Banco con los gobiernos— evidentemente tomando en cuenta las especificidades de las diferentes condiciones nacionales.

v) Cooperar con otras instituciones financieras, países donantes, y ONG internacionales a fin de asegurar la coordinación de los programas de apoyo de la comunidad internacional en este campo. Utilizar las operaciones de crédito y de cooperación técnica a los países como instrumento catalizado para movilizar recursos externos adicionales.

RESULTADOS DE LA XIX ENCUESTA DE OPINION PUBLICA

Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña. CIOPS
Universidad Tecnológica de El Salvador



FICHA TECNICA

Institución responsable

Universidad Tecnológica de El Salvador a través del Centro de Investigaciones de la Opinión Pública Salvadoreña.

Institución patrocinadora

Universidad Tecnológica de El Salvador

Proyecto

XIX Encuesta de Opinión Pública

Fecha de realización

12, 13 y 14 de febrero 1999

Objetivo

Conocer la opinión de la población sobre los diferentes aspectos de la realidad nacional especialmente sobre las preferencias políticas para las elecciones de 1999.

Ubicación Geográfica

Los 14 departamentos de El Salvador, distribuyendo la muestra en 90 municipios.

Financiamiento

Fondo destinados por la Universidad Tecnológica de El Salvador.

Población

5,118,599 Habitantes

Este dato para la encuesta de opinión pública, se tomó de acuerdo al V Censo de Población y al IV de Vivienda del Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos, 1993.

Muestra

2,123

Se utilizó para el cálculo de esta muestra la fórmula para un diseño muestral probabilístico de poblaciones numerables finitas, la cual fue distribuida en los 14 departamentos y 90 municipios.

Boletas válidas

2,123

Método

Se utilizó el método de distribución por cuotas, asignándole a cada departamento y punto de evaluación una cantidad de boletas de acuerdo al porcentaje de población correspondiente, seleccionándose los encuestados en forma aleatoria simple, ubicándolos en parques, colonias, mercados, negocio, etc.

Error muestral $\pm 4\%$

Dirección Técnica

Ing. Nelson Zárate Sánchez

DATOS GENERALES

La muestra fue distribuida de acuerdo a las siguientes variables:

Departamento	%
San Salvador	29.53
Santa Ana	9.00
San Vicente	2.78
Usulután	6.17
Ahuachapán	4.99
San Miguel	8.20
Sonsonate	7.02
La Unión	4.95
La Paz	4.66
La Libertad	9.84
Morazán	3.11
Chalatenango	3.49
Cabañas	2.73
Cuscatlán	3.53
Total	100.00

Localización

Urbana	56.67
Rural	40.04

Sexo

Femenino	49.91
Masculino	50.09

Estado civil

Soltero	43.52
Casados	37.02
Acompañados	12.81
Divorciados	2.78
Viudo	2.59
Sin opinión	1.27

Edad

18-25	25.25
26-35	28.83
36-45	22.00
46-55	13.42
56 ó más	8.43
No contestó	2.07

Escolaridad

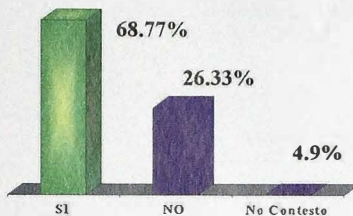
Ninguna	10.27
1° a 3°	9.61
4° a 6°	18.70
7° a 9°	19.22
Bachiller	22.66
Técnico	2.68
Universitario	15.26
No contestó	1.60

Centro de Investigación de la
Opinión Pública Salvadoreña
(CIOPS)

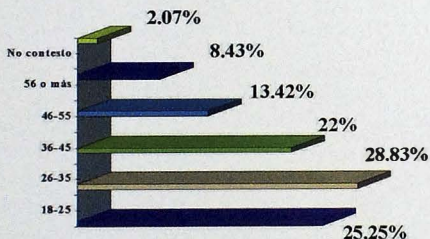
XIX Encuesta de Opinión
Pública

Del 12 al 14 de febrero de 1999

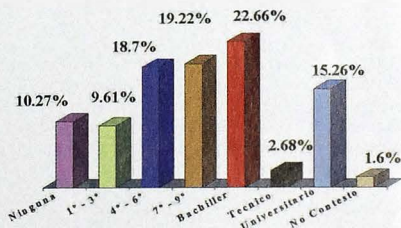
¿Voto en las elecciones pasadas?



EDAD



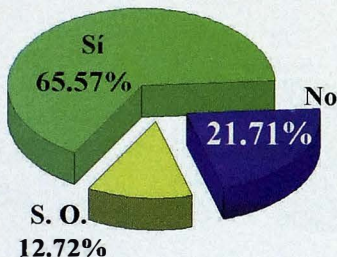
ESCOLARIDAD



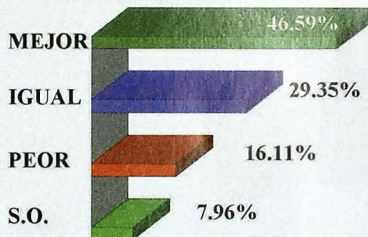
1. ¿Observa en la actual campaña electoral los siguientes criterios?

CONCEPTO	SI	NO	SIN OPINION
HONESTA	34.57	44.32	21.10
REALISTA	32.55	45.50	21.95
OBJETIVA	35.28	41.83	22.89
RESPECTUOSA	47.10	31.75	21.15

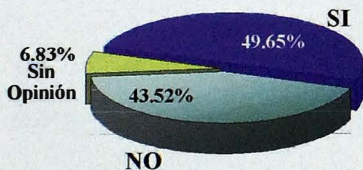
2. ¿Considera que los actuales candidatos, poseen la capacidad para ser Presidentes de la república?



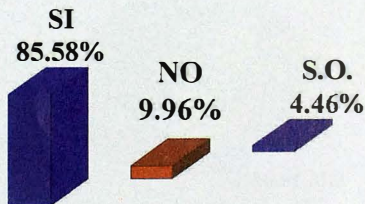
11. ¿Cómo evalúa la campaña electoral comparada con la de años anteriores?



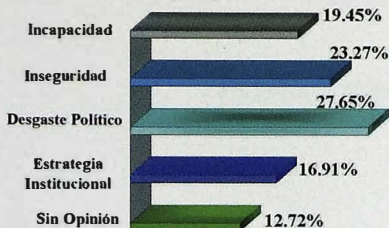
3. ¿Está usted interesado en un debate entre los candidatos a la presidencia?



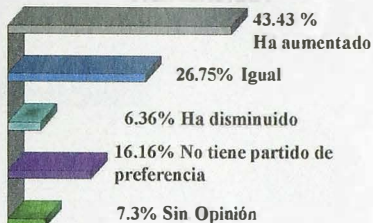
Si contesto sí, ¿Considera que el debate contribuye a consolidar la democracia en el país?



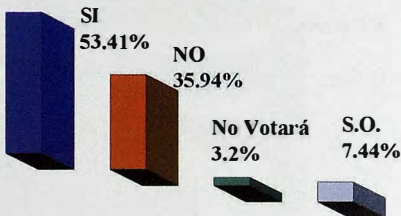
4. ¿Por qué considera que un candidato Presidencial se resiste a participar en un debate?



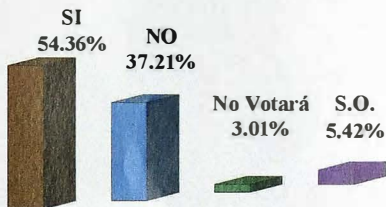
5. ¿Cómo evalúa la imagen del candidato de su preferencia como resultado de la campaña electoral durante el último mes?



6. ¿Influye el candidato a la Vice-Presidencia en su decisión de voto?



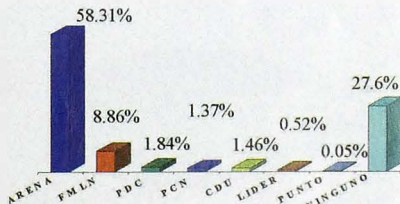
7. ¿Influye el contenido de la campaña política en su decisión de voto?



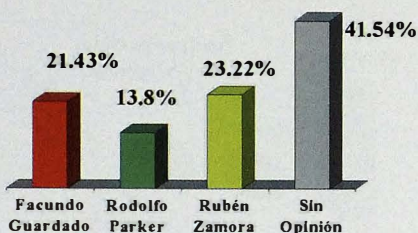
Si contestó si, ¿De qué manera?



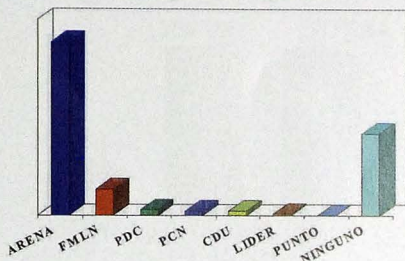
8. ¿Qué partido político ha realizado la mejor campaña electoral?



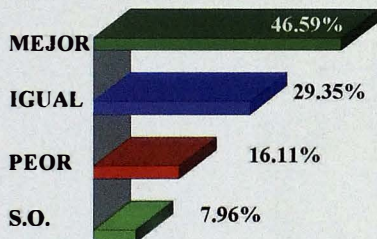
9. De los siguientes tres candidatos de la oposición ¿A cuál considera más capaz para gobernar el país?



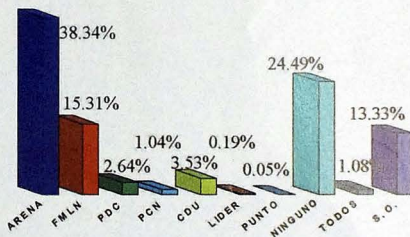
10.- ¿De que partidos políticos conoce la plataforma de gobierno?



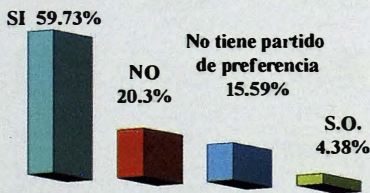
11. ¿Cómo evalúa la campaña electoral comparada con la de años anteriores?



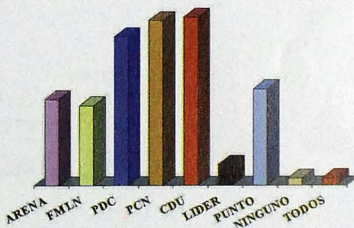
12. ¿Qué partido político considera más capaz para solventar los problemas que tiene nuestro país?



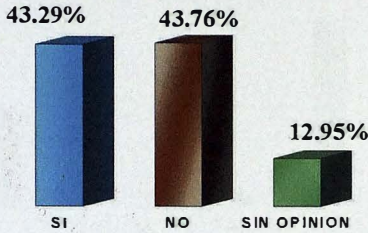
13. ¿Considera que el partido político de su preferencia, se ha esforzado al máximo en la campaña electoral?



14. ¿Qué partidos políticos han realizados mitines en su municipio?



15. Si hubiese segunda ronda, ¿Estaria de acuerdo que se presentaran cambios en la fórmula presidencial?



16.- ¿Considera suficiente el apoyo que le brinda el partido político al candidato de su preferencia?



17.- ¿Ha cambiado de partido político desde la última vez que votó?

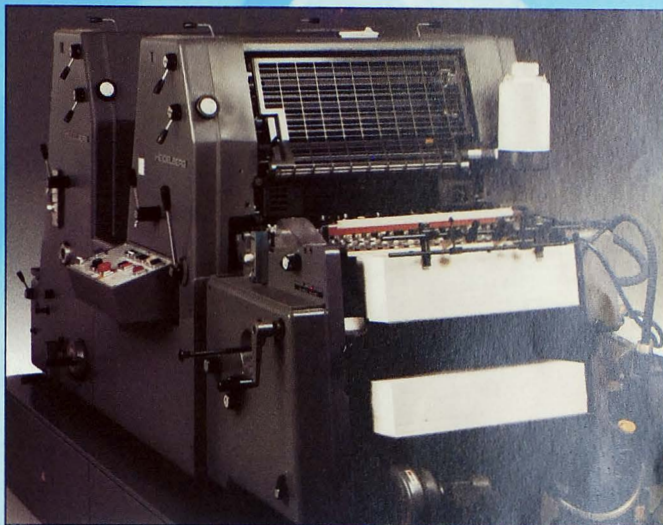


¿Por cuál partido Votará en las próximas elecciones Presidenciales





Tecnoimpresos, S.A. de C.V.
Tecnología Impresa



Ofrece los servicios de:

IMPRESION OFFSET

- Revistas
- Brochure
- Boletines
- Memoria de Labores
- Libros
- Hojas Volantes
- Folletos
- Y todo lo relacionado.

PRE-PRENSA Y DISEÑO

- Separación de Colores
- Servicio de escaneo
- Impresión de Negativos
- Montaje digitales
- Diseño Gráfico

**19 Ave. Norte No. 125, San Salvador,
El Salvador, C.A. Tel.:271-5990 Fax: 271-4764**

*el arte
de dirigir...*

los ritmos cambiantes...

los acordes justos...

la armonía necesaria...

el tiempo de ejecución...



Mayor Información: Edificio "Thomas Jefferson", Calle Arce y 17 Ave. Norte
Tel.: 271-1242 y Tel/Fax: 271-0455